

Análisis de Coyuntura

REVISTA MENSUAL

AGOSTO DE 2005

AÑO IV • Nº 62

1 PESO

Situación Mundial

Se profundizan los enfrentamientos regionales: al conflicto con Medio Oriente se suma a un creciente enfrentamiento con China

Crece la necesidad de cohesión de las alianzas políticas: se agudiza la lucha política en la UE y EE.UU.

América Latina

La Cumbre de las Américas levanta temperatura

La corrupción como
“garantía” de la estructura política

Argentina

Precios y Salarios: ejes de
una renovada disputa nacional

Los diarios se meten de lleno
en la campaña electoral



Situación Mundial

3 Seguridad

- El conflicto con Medio Oriente
- El enfrentamiento con Asia

6 Situación Política

- El resurgir del proteccionismo
- Se agita la lucha política y altera las posibilidades de conformación de alianzas

América Latina

10 Pelea por las ganancias

- El CAFTA como ensayo hacia el ALCA

10 Coyuntura Política

- La Cumbre de las Américas y la imposibilidad de consensos totales
- La corrupción nuestra de cada día
- Brasil: no se salva nadie
- Apunten contra Chávez

13 Seguridad

- Militares en Uruguay: del perdón a la (parcial) revisión
- Paraguay: la nueva “cabecera de playa” norteamericana
- Colombia: Uribe busca aliados extra regionales

Argentina

16 Pelea por las ganancias

- “Adiós al Fondo (y arriba la patria)”
- Precios: Las penas y las vaquitas
- La sopa del salario y la inflación

19 Coyuntura política

- La interna del PJ: por dentro, por fuera, y el intento de contener a Kirchner
- La prensa escrita, de campaña
- Elecciones sin votantes, y alianzas sorprendentes en las internas de la oposición

23 Conflicto social

Análisis de Coyuntura

Revista Mensual
Agosto de 2005
Año IV • N° 62

Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Sebastián Juncal, Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak, Sergio Zisman. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz.

Fuentes consultadas: EE.UU.: *New York Times* (NYT); *Washington Post* (WP); *Usa Today* (UT) y *Washington Times* (WT) – Francia: *Le Figaro* (LF); *Le Monde* (LM) – Gran Bretaña: *The Economist* (TE); *BBC News* (BBC) – España: *El País* (EP); *El País* -edición internacional (EPEI); suplemento Nueva Economía de *El Mundo* (NEEL) – México: *La Jornada de México* (LJdM) – Venezuela: *El Universal* (EU) – Colombia: *El Tiempo* (Et) – Bolivia: *Los Tiempos de Cochabamba* (LTC) – Perú: *La República* (LR) – Brasil: *Folha de Sao Paulo* (FSP); *O estado do Sao Paulo* (OSP); *Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo* (FDT-FSP) – Argentina: *Clarín* (C); *La Nación* (LN)

Para contactarnos: informecon@yahoo.com.ar

En este número

La acumulación del capital plantea siempre –y cada vez más perentoriamente– la necesidad de ampliar la escala de su accionar. Esa ampliación encuentra a esta altura de la historia, un espacio heterogéneamente dividido en estados nacionales que implican barreras políticas, y se plantea así el avance contradictorio de procesos de regionalización. Contradictorio hacia dentro y hacia fuera de cada espacio nacional.

Hacia fuera porque las fracciones que controlan políticamente cada espacio no ceden lo que implicaría una completa integración de los espacios concientes de que si es la necesidad lo que empuja hacia ella, también existen riesgos para los capitales más débiles. Una ilustración de esto es el rechazo al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) por parte de algunos países sudamericanos lo que da aire al sostenimiento y avance de procesos como el de Venezuela. Otra más extrema, el recurso a la fuerza militar contra fracciones que no ceden espacios estratégicos. Y también es expresión de esto el resurgir del proteccionismo “selectivo” en EE.UU. y en Francia e Italia.

É igualmente contradictorio es el avance dentro de los espacios nacionales, pues integrarlos a otros implicará perdedores que no se resignarán sin más a su destino y fuerzan así a las fracciones más concentradas a apelar a recursos cada vez más extremos para lograr resultados más bien exigüos. Tal el caso de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Centro América (CAFTA) en EE.UU.

Por otro lado, tenemos como tema relevante la irresuelta saga de denuncias de corrupción que impactó de lleno en el gobierno brasileño y la cúpula del PT. Se revelan así una vez más las formas que asume necesariamente la democracia representativa funcional a la acumulación del capital: tal es así que el mismo esquema de financiación ilegal fue usado por la actual oposición cuando era gobierno.

Finalmente, en nuestro país precios y elecciones son lo más destacado, sin que esto signifique que los demás conflictos se resolvieran. Al contrario, la relación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional no muestra avances hacia un acuerdo. Se asume que será imposible acordar antes de las elecciones, y mientras tanto uno plantea el adiós y la independencia esgrimiendo el desendeudamiento, y el otro redobla las condiciones y exigencias con un nuevo recetario de medidas económicas. En cuanto a los precios, el despunte inflacionario mostró peleas al interior de la burguesía local, y entre las fracciones más concentradas y el gobierno: el recurso a distintas medidas políticas no hace sino revelar alineamientos y posiciones de mayor o menor fuerza. En lo que la burguesía local y el equipo económico mostraron unanimidad es en el nivel adecuado del precio del trabajo: rechazan de plano los aumentos de salarios y los asocian al aumento de la inflación. Respecto a las elecciones de octubre, su acercamiento pone más en evidencia los síntomas de la crisis de representatividad y la consiguiente descomposición partidaria en todo el arco político nacional. Y como dato importante, la prensa – Clarín y La Nación, y la entidad que nuclea a las empresas editoras, ADEPA– vienen interviniendo activamente en la campaña electoral, en una discusión diaria a través de noticias y editoriales con el propio presidente Kirchner.

Ahora sigue algo de todo esto...

Situación Mundial

Los atentados aceleraron, en los países que los sufrieron, la necesidad de alguna respuesta y modelaron la percepción de esa misma necesidad por parte del conjunto de la sociedad. Si bien emergente de todos los aspectos de la vida social, la “*respuesta política*” llevaría la principal parte en las interpelaciones y, de alguna manera, la centralidad de los cambios. Lo que en parte le corresponde por tratarse de la encarnación de la soberanía política colectiva, a través de la cual estado y gobierno promueven los imperativos generales, comunes y específicos, del espacio de acumulación en que se desenvuelve. Lo fue en 2001 en EE.UU. y en 2004 en España. Ahora toca el turno de Inglaterra, cuya respuesta se sitúa mucho más cerca de la de su tradicional aliado y socio que de la ensayada por un Zapatero que es, en gran medida, un subproducto de dichas transformaciones. Estos espacios, la UE y EE.UU.-Nafta comparten, en distinta posición y por ende con disímil grado de desprendimiento, la posición hegemónica en el planeta. En su discurrir simbiótico empujan fronteras afuera su irresolución. Eso las lleva, cada una con diverso grado de cohesión interna entre sus clases sociales y entre dicha relación y sus formas políticas, a toparse con otras formaciones económico sociales que se encuentran también en un proceso de ampliación de la escala, que habitualmente toma la forma política de integración regional. Es inevitable la colisión. Con el Medio Oriente musulmán, cuyo más propagandizado modelo intentamos describir en el número anterior, no cabe más que el más alto grado de confrontación militar, que se encarna vivamente en desproporcionada escala en el metro londinense y en lo que queda de la otrora Babilonia

Mesopotámica, conflicto insuflado por el desarrollo histórico de la región. De ahí que tome otra forma cuando se trata del otro extremo de Asia, donde China comienza a encabezar políticamente la región cuyo liderazgo productivo comienza a compartir con Japón. El conflicto hasta el momento velado toma cuerpo en los avances de fracciones de un capital centralizado por su forma política (China) sobre fracciones de capital centralizado por el proceso de acumulación (EE.UU.). El grado de enfrentamiento es menor aún, pero los vientos proteccionistas soplan desde el Atlántico Norte hacia el este. En parte aún se trata de los prolegómenos necesarios para consolidar una alianza política con la fuerza necesaria para enfrentar desafíos mayores que el impresentable CAFTA. La difícil aprobación de este tratado demostró que las contradicciones al interior reducen la cohesión entre las regiones, ramas, sectores y fracciones, de cara al enfrentamiento a nivel nacional o regional. Seguramente ello es a la vez causa de la necesidad de profundizar la subordinación, para así centralizar las decisiones clave para el desenvolvimiento del proceso de acumulación, y consecuencia de las formas ideológicas (y su desarrollo histórico) que permiten a determinada fracción presentar su interés particular como interés general. No es casual que en la actualidad la rama energética sea el desencadenante, la causa o el justificativo de la emergencia del enfrentamiento manifiesto. Y a su vez que pueda conducir desde su base principal en el estado de Texas, la alianza política que domina el gobierno y pueda mostrar, sin sonrojarse, que procura más de lo mismo y por ende, de lo nuevo.

Seguridad

El conflicto con Medio Oriente

El 7-J y sus consecuencias políticas inmediatas

Los atentados del 7 de julio en Londres, en momentos en que el gobierno laborista celebraba la designación de su capital como sede olímpica y recibía a los dirigentes del G-8 en Escocia, tuvo como efecto inmediato cohesionar a los países de la UE en torno al “*consenso antiterrorista*”. Este consenso forma parte de una construcción metódicamente desplegada por el gobierno de Londres y constituye la contracara del “*poder blando*” evocado en la reunión del G-8 a través de sus tibias iniciativas de perdonar la deuda (incobrable) de países africanos y llegar a un acuerdo (cuyo contenido se desconoce a la fecha) respecto del deterioro ambiental (ver *Análisis* 56). El asesinato de inocentes, presuntamente responsabilidad de miembros de Al-Qaeda, sirve para desencadenar una batea de iniciativas represivas que a menudo se justifican mediante argumentos xenófobos.

En Reino Unido, Blair presentó una serie de medidas destinadas a facilitar la expulsión de “*indeseables*” (“*parásitos del derecho de asilo*”) en el marco de “*decisiones*

administrativas”. Significativamente, el gobierno niega toda relación directa entre los atentados y la intervención británica en Irak. Entre las medidas se destacan la caracterización de delito de todo discurso que justifique el terrorismo, la prolongación del plazo (de tres a catorce días) que un sospechoso puede estar detenido sin cargos, amplios poderes al ministerio de Interior para expulsar a ciudadanos británicos que actúen “*contra los intereses del país*”, la ilegalización de ciertas asociaciones musulmanas (incluso Hizb tu-Tahrir, que se declara pacifista), el incremento de tribunales especiales para casos de terrorismo y “*la reforma de la Ley de Derechos Humanos por la cual Reino Unido se sumó a la Convención Europea de Derechos Humanos, en los casos en que sean un obstáculo para la lucha antiterrorista*” (LF 6/8). Todo esto en el marco de una recuperación de la popularidad de Blair, tan maltrecha luego de las elecciones de junio: “*Debe recordarse que, a diferencia de los españoles, quienes tenían en el PSOE una opción política para sacar a su país de la guerra, los británicos deben decidir, en las urnas, entre dos fuerzas electorales hegemónicas, el laborismo del propio Blair y los conservadores, tradicionalmente belicistas que están de acuerdo en proseguir la ocupación de Irak, con todo y lo que ello implica*” (LJdM 9/7).

En Francia, el Consejo de Seguridad Interior, que preside Chirac, decidió aumentar la video-vigilancia en espacios públicos y la escucha de líneas telefónicas de individuos “*sospechosos*” por parte de las fuerzas de seguridad. El ministro de Interior anunció que tiene como intención duplicar a 25.000 el número de inmigrantes expulsados en 2005, a la vez que se pronunció contra los “*abusos*” en procesos de reunificación familiar y contra la política oficial de becas a estudiantes del tercer mundo: “*Queremos a los mejores estudiantes del mundo en nuestro país y no a aquellos a quien nadie desea*” (CL 6/7).

En Alemania, la oposición reclama la intervención del ejército en la lucha antiterrorista. Y en Italia, el gobierno expresó su temor a ser el próximo blanco de los fundamentalistas (Italia conserva 3.150 hombres en Irak y unos 10.000 en Afganistán) y desencadenó una serie de *razzias* en el norte del país tendientes a interrogar a ciudadanos musulmanes. Sus aliados de Liga Norte presionan para que se prohíba la construcción de mezquitas y escuelas coránicas (éstas últimas se duplicaron entre 1999 y 2005) y para que se arreste a mujeres que usen velo. El ministro de gobierno Roberto Calderoli afirmó que “*no hay un choque de civilizaciones: Occidente es una civilización, el Islam no*” (LF 29/7), al tiempo que el Senado debate la dotación de mayores facultades a las fuerzas de seguridad para efectuar allanamientos.

Hay que señalar que esta verdadera “*psicosis antiterrorista*” no constituye una respuesta a los atentados del 7-J, sino que éstos contribuyeron a profundizar una tendencia consensuada al interior del llamado “*núcleo duro*” de países de la UE (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España), cuyos ministros de Interior habían acordado dos días antes del estallido de las bombas efectuar vuelos conjuntos para ahorrar costos en la expulsión de inmigrantes; otro proyecto en danza es el de crear, fuera del territorio de la UE, campos de refugiados donde *depositar* a los solicitantes de asilo. El ministro de Interior español llegó a reclamar, en esa reunión, que las decisiones de este G-5 sean vinculantes para el resto de los países de la UE (LF 6/7). Los puntos de vista concordantes de los EE.UU. y la UE en torno al “*problema terrorista*” se expresaron abiertamente unos días después, en la conferencia intergubernamental del 22 de julio.

En EE.UU., por su parte, los atentados contribuyeron a profundizar la tendencia a reducir la incidencia de los argumentos en pos de un restablecimiento del estado de derecho. Se recurre a medidas como la clasificación indiscriminada de documentos (se hacen inaccesibles a la población documentos gubernamentales): “*un récord de 15,6 millones de documentos fueron clasificados el año pasado, casi el doble respecto del 2001. Mientras que el proceso de desclasificación se hizo lento y engorroso, reduciendo la cantidad de documentos disponibles anualmente de 204 millones de páginas en 1997 a 28 millones el año pasado*” (NYT 3/7) o la persecución de opositores: “*El F.B.I. recolectó al menos 3.500 páginas de documentos internos en los últimos años*

sobre grupos de derechos civiles y opuestos a la guerra” (NYT 18/7).

La ofensiva parece sólida, aunque aún se pueden detectar en ella ciertos flancos. En Europa, el programa de gobierno del frente alemán de izquierdas plantea el retiro inmediato de las tropas de su país de Afganistán. Por su parte, numerosos referentes del laborismo opuesto a Blair están expresando abiertamente sus disidencias, entre ellos George Galloway, recientemente elegido diputado por la coalición *Respect* (ver *Análisis* 60): “*Una persona asesinada por una bomba muere de la misma manera si la asesinan aquí, en Madrid, en Falluja o en Bagdad. No hay justificación para esas muertes. Y no hay diferencia entre una guerra ilegal basada en mentiras y el horrible acto terrorista sucedido ayer (...) Bin Laden es un oscurantista salvaje que si no hubiese una reserva de odio entre el pueblo musulmán, que él utiliza, estaría completamente aislado. Si no existiera este lago de odio —para usar una metáfora de Mao— Bin Laden se trasformaría en un pez fuera del agua y terminaría secándose y moriría. Mientras nosotros continuemos alimentando este lago de odio con sangre, Bin Laden continuará teniendo un lugar donde nadar. Lo que debemos hacer es secar el lago en el cual Al Qaeda nada. Y entonces Bin Laden se transformará en una ballena encallada*” (LF 10/7). Mientras que en EE.UU., la renovación del Acta Patriótica que conculcó derechos judiciales y políticos de los nativos y extranjeros en el contexto de la lucha antiterrorista, revela las diferencias al interior de la clase política. “*La Cámara de Representantes votó 257 a 171 por extender o hacer permanentes las provisiones más controvertidas, mientras el Senado aprobó otra versión que da más autoridad al Departamento de Justicia y limita el alcance y la duración general de la ley*” (WP 22/7). Ahora debe llegarse a una versión unificada, que debe ser tratada por ambas cámaras. Allí veremos, seguramente, imponerse criterios más acordes con las prioridades de seguridad del gobierno de Bush, teniendo en cuenta que “*El Departamento de Justicia se opuso a muchos elementos de la propuesta del Comité Judicial del Senado, incluyendo las provisiones para elevar los requerimientos mínimos para obtener aprobación para ciertos tipos de vigilancia y el escrutinio público acerca de cuán seguido son usados dichos poderes*” (NYT 14/7). Como siempre, en los dichos del Vicepresidente Dick Cheney podemos encontrar los principios que rigen el accionar de la administración: “*los presos de Guantánamo están bien tratados, viven en el trópico, están bien alimentados y tienen todo lo que necesitan*” (EP 27/6).

La respuesta iraní

En este contexto, el rechazo por parte de Irán de una nueva propuesta de negociación por parte del denominado E-3 (Gran Bretaña, Francia y Alemania) y su anuncio de que reanudará en forma unilateral el tratamiento de uranio, no pueden más que obligar a estos países centrales de la UE a alinearse detrás de la actitud “*dura*” de los EE.UU. Irán había suspendido, como parte de un acuerdo con los representantes de la UE ante la OIEA (organización que regula las actividades

nucleares y depende de la ONU), sus actividades de enriquecimiento de uranio en su central de Isfahán. Irán asegura que esto se destina a fines civiles, y que se siente discriminado por los gobiernos occidentales, que permiten el desarrollo de armas nucleares por parte de aliados del tercer mundo (India y Pakistán). Su negativa a aceptar las condiciones que le propone la UE no puede desvincularse de la llegada al poder del nacionalista Ahmadinayed; constituye, por otra parte, un fracaso en el intento europeo de sustraer a Rusia un mercado para la colocación de maquinaria y combustible nuclear y un proveedor importante de petróleo (condiciones incluidas en la “*propuesta amistosa*” que Irán rechazó). Los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Alemania amenazaron con respaldar la iniciativa de EE.UU. de llevar a Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU; donde Irán cuenta, con casi absoluta seguridad, con el veto de Rusia (EP 5/8).

El enfrentamiento con Asia

Alianzas con mayor grado de consolidación complican la relación con China. Como anticipamos en *Análisis* anteriores, las incipientes compras de empresas norteamericanas (y europeas) comenzaron a generar un malestar general, tensando las relaciones entre los distintos bloques comerciales. No es casual, como veremos en el apartado referido a situación política, que el conflicto se profundice y tome cuerpo en la opinión pública cuando se trata de una rama estratégica como la energía.

Apenas conocida la oferta de C.N.O.O.C. Ltd.¹, las voces a favor y en contra revelaron el grado de la disputa. Como es habitual, en el Congreso los primeros en manifestar su oposición fueron los congresistas tejanos, que “*en una carta al presidente advirtieron sobre la amenaza que suponen las agresivas tácticas chinas para asegurarse fuentes de energía alrededor del mundo que destinan para uso propio*” (WP 1/7). La empresa objeto de compra, Unocal es fundamental para ese país, pues tiene 70% de sus reservas en Asia. El principal argumento esgrimido, es que China no es una economía de mercado. Asimismo, “*El Pentágono aceleró la publicación de un retrasado reporte sobre el ejército chino, en el que algunos expertos advierten sobre la emergencia de China como un rival estratégico*” (NYT 15/7).

El resurgimiento proteccionista despertó temores entre contendientes de envergadura, preocupados por el impacto que medidas de esta naturaleza tiene sobre las conversaciones sobre libre comercio de la actual Ronda de Doha. En definitiva, éstas significan un freno para negocios de otras importantes fracciones del capital con poderosos intereses: “*Goldman Sachs y Allianz de Alemania están llevando a cabo negociaciones para adquirir 1.000 millones de dólares en acciones del Banco Comercial e Industrial de China (I.C.B.C. por sus siglas en inglés), el banco estatal más grande. Goldman, J.P. Morgan e I.C.B.C. encabe-*

zan el acuerdo de crédito por 9.000 millones a C.N.O.O.C., si tiene éxito en adquirir Unocal” (NYT 11/7). La sociedad acercó herramientas políticas en el mismísimo corazón del poder, al conseguir el servicio de lobby de “*James C. Langdon Jr., el más importante consejero de inteligencia de la Casa Blanca, contactado por la firma lobbyista Akin Gump*” (WP 12/7). Esta incipiente fractura intentó ser conjurada de inmediato. Quienes salieron al ruedo fueron Lewis “*Scooter*” Libby, asesor del vicepresidente Dick Cheney y el representante Curt Weldon, republicano de Pennsylvania y un auténtico halcón antichino, quien manifestó que “*desgraciadamente, el dinero de las corporaciones habitualmente vulnera nuestra seguridad nacional*” (WP 12/7). De todas formas, las voces contrarias a esta nueva postura que amenaza no pueden ser eliminadas, como demuestra “*el subsecretario de Estado, Robert Zoellick, quien manifestó fuertemente su oposición al bloqueo político de lo que se percibe como un mero acuerdo de negocios*” (WP 12/7).

Anticipando el desenlace, pues su acción tiene más peso simbólico que económico “*el mayor inversor no gubernamental de CNOOC, William Blair & Co., se desprendió del 0,5% de las acciones por 160 millones de dólares. La razón aducida es que la empresa parece comenzar a basarse en consideraciones políticas más que empresariales*” (WP 20/7). Finalmente, la victoria pírrica de la alianza gobernante, llegó pese a los riesgos que entraña. “*C.N.O.O.C. Ltd., de China, abandonó sus esfuerzos por comprar la petrolera estadounidense Unocal Corp., poniendo fin a una larga batalla de adquisición que ha creado nuevas pruebas para los lazos entre EE.UU. y China en medio de una creciente fricción económica. El retiro de la compañía china significa que el postor rival, Chevron Corp., seguramente ganará el control de Unocal. La oferta de 18.400 millones de dólares era 800 millones mayor a la de Chevron. El factor decisivo en su retiro es la oposición en el Congreso de EE.UU., que incluyó el inusual paso de erigir bloqueos legislativos en contra de un acuerdo que ni siquiera se había firmado. CNOOC fue víctima de una explosión de sentimientos antichinos en Washington. Las tensiones entre ambos países han crecido recientemente, a medida que Pekín se ha quejado de los esfuerzos de EE.UU. por limitar las importaciones de textiles, acero y televisores chinos. Analistas y hombres de negocios temen que China tome represalias contra negocios estadounidenses*” (WSJ 3/8).

Las respuestas económicas (desde compras de aviones y títulos del tesoro a la mayor predisposición a estrechar las relaciones con otros países) preocupan a los inversores. ¿Cuál será el alcance de la respuesta? Difícil predecirlo por el momento. A juzgar por las repercusiones políticas, al menos en el plano declamativo, no es descabellado considerar un mayor grado de enfrentamiento. Así lo demuestran los dichos del General Zhu Chenghu, quien manifestó que “*China usará armamento nuclear contra EE.UU. si interviene militarmente en el conflicto con Taiwán*” (NYT 15/7).

¹ Empresa cuya propiedad pertenece en un 70% a la empresa estatal China National Offshore Oil Corporation.

Situación Política

El proteccionismo a nivel global cobró nuevos bríos con el asunto energético desarrollado en el apartado anterior. De hecho, los impulsos siempre estuvieron presentes tanto dentro de EE.UU. (y por extensión del NAFTA) como de la UE. El relativo peso en el plano meramente económico de las iniciativas desarrolladas hasta el momento, contrasta con el valor político de la aprobación del CAFTA. “*Rob Portman, Representante Comercial norteamericano, manifestó que se trata de una medida importante para sostener el compromiso norteamericano con el libre comercio. En términos económicos, el CAFTA tendrá efectos nimios sobre la economía norteamericana. El 80% de las exportaciones de esta zona a EE.UU. ya estaban libres de derechos, y el volumen es pequeño: las exportaciones de los seis países, aproximadamente 17.000 millones de dólares, es igual a las exportaciones anuales del estado de New Jersey*” (NYT 29/7). No obstante, “*la estrecha aprobación del CAFTA por 217 votos contra 215 levantó dudas en el mundo sobre la disponibilidad del congreso estadounidense para reducir subsidios agrícolas y tomar otros pasos políticamente dolorosos*” (WSJ 29/7), demuestra las dificultades que las iniciativas de liberalización comercial encuentran en el interior del país. Producto del disfrute del Fast Track² provoca simultáneamente una mayor avidez por mecanismos de subordinación de fracciones en la lucha política. El corolario de ello es una mayor virulencia y decisión en el uso de las herramientas disponibles.

**El resurgir del proteccionismo:
¿imposibilidad de estructurar soluciones
negociadas al interior del espacio político?**

Las tribulaciones del CAFTA

Dejamos para América Latina sus efectos sobre la región, veamos aquí qué ha puesto de manifiesto dentro de EE.UU. Algunos sectores —viejos conocidos de la alianza gobernante— han sabido sacarle provecho a un acuerdo comercial que parece de escasos efectos: la suma de los PBI los países centroamericanos del acuerdo no supera el 1% del total del PBI norteamericano. Sin embargo, el habitual trabajo entre bastidores de la industria farmacéutica rindió sus frutos: “*los mayores lobbies parecen haberse impuesto en el acuerdo, pues extenderá el monopolio de las farmacéuticas, significando mayores precios para los empobrecidos países de América Central. Las preocupaciones del sector textil y azucarero contrastan con la euforia farmacéutica, ya que las provisiones del tratado aseguran cinco años de exclusividad para las drogas de marca, aún si el período de*

vigencia de la patente por 20 años ya expiró en EE.UU.” (NYT 2/7).

Si bien diversas fracciones, ramas y regiones estuvieron involucradas directamente en su aprobación, la resistencia que despertó demuestra que no son meramente intereses corporativos y sectoriales los que están en juego. Tratándose de la economía más transnacionalizada y dependiente de la libertad de comercio, el impacto político de la medida se privilegia por sobre necesidades específicas de las distintas ramas en el proceso de acumulación. Esto llevó a asumir riesgos. La aprobación estuvo plagada de desprolijidades y maniobras inusuales: “*el vocero Dennis Hastert tuvo que prometer al congresista de North Carolina, Robin Hayes, que establecerían medidas contra China para proteger la golpeada industria textil de ese estado, para que éste cambie el voto. Los líderes republicanos mantuvieron la votación abierta durante casi una hora, violando el límite de los 15 minutos. Además, el congresista Charles Taylor, también de North Carolina, insistió en que su voto en contra no fue considerado por un error en el sistema electrónico que lo registró como una abstención*” (NYT 29/7). Parece tratarse de una ofensiva global por parte del personal político de un buen número de fracciones. El cambio parece quedar demostrado por la multiplicación de indicios que demuestran una mayor injerencia política en acuerdos entre empresas. Como el que involucra a “*The Whirlpool Corporation, que lanzó una oferta hostil para adquirir Maytag por 1.360 millones de dólares*”. La oferta surge en momentos de ansiedad en el Congreso norteamericano por los intentos chinos de adquirir empresas norteamericanas” (NYT 18/7).

El “patriotismo empresarial” bloquea el mercado abierto.

En julio se registraron notorios casos de intervencionismo por parte de autoridades nacionales europeas, con el fin de obstaculizar fusiones transnacionales; las cuales, sin embargo, son consideradas como un imperativo para las autoridades de la Comisión. Las interferencias gubernamentales no son estrictamente ilegales: por presión de Alemania, Francia e Italia la Comisión se vio obligada a emitir en 2000 una directiva que las permite “*por razones de orden cautelar*”. La resistencia de ciertas fracciones de la burguesía de los países centrales de la UE es mayor cuando lo que está en juego es el sector finanzas, es decir, el control “*nacional*” del crédito.

³ La oferta de Whirlpool llega dos meses después de que Maytag acepte una oferta de 1.130 millones por parte de Ripplewood Holdings. A la que luego se sumó la del conglomerado chino Haier, con apoyo financiero de las firmas norteamericanas Blackstone Group y Bain Capital, por 1.280 millones. En su momento, la venta del negocio de computadoras personales de I.B.M. a Lenovo Group de China en diciembre pasado no levantó tan firme oposición.

² Mecanismo otorgado por el Congreso norteamericano al Poder Ejecutivo de ese país para negociar acuerdos comerciales. El aspecto central es que el tratamiento del congreso se reduce a aceptar o rechazar totalmente el acuerdo, sin la posibilidad de proponer modificaciones.

to. En los últimos 10 años, las fusiones transfronterizas en la UE representaron un 45% de las fusiones totales; pero en el sector de finanzas, sólo un 20% (EM NE 31/7).

En Italia, un ejemplo reciente fue el éxito del Banco de Italia (equivalente a nuestro Banco Central) en bloquear la adquisición de dos entidades por bancos extranjeros (ver *Análisis* 58). La embestida del español BBVA sobre el BNL resultó frustrada por una contraoferta a manos del grupo local Unipol, una maniobra abiertamente orquestada por el gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, y que enfrentó a empresas de gran capital local (Generali, Della Valle) e internacional (BBVA) contra un bloque de 15 grupos de construcción acaudillados por el magnate Francesco Castaligione. Unipol –en sus comienzos una cooperativa obrera devenida grupo asegurador en 2003, luego de su absorción de Winterthur–, adquiere con el BNL una entidad cuatro veces más grande que ella misma. Final semejante tuvo el intento del banco holandés ABN-Amro de absorber Antonvéneta, que finalmente quedó en manos del Banco Popolare. Es interesante señalar que el proteccionismo de las finanzas locales funciona en Italia “para adentro”: a fines de julio, los accionistas de la primera entidad italiana en el sector, Unicredito, aprobaron la fusión con el segundo banco alemán, HVB Group, en lo que resulta ser el mayor acuerdo entre empresas europeas registrado hasta la fecha.

En Francia, por su parte, los rumores de que el grupo norteamericano Pepsi Co. planeaba realizar una oferta pública de acciones sobre el gigante local Danone (líder mundial en lácteos), movilizó al presidente y al primer ministro a defender el “patrimonio francés”. El fundador de Danone, Antoine Riboud, hizo lobby para asegurarse de que la amenaza de Pepsi Co. fuera conjurada, como en 2004 la amenaza del grupo farmacéutico suizo Novartis sobre el francés Sanofi. Para Riboud, “Danone es como la catedral de Chartres, y nadie puede comprar la catedral de Chartres.”(TE 21/7).

La fuerza necesaria para imponer soluciones a fracciones indóciles agita la lucha política y altera las posibilidades de conformación de alianzas

Con distinta estructura, los bloques regionales de la UE y el NAFTA enfrentan similares necesidades: ambos se ven empujados a homogeneizar la alianza en el poder para lograr imponer soluciones a aquéllas fracciones que no la conforman. Por un lado, EE.UU., timonel político del bloque regional, posee mayores recursos para hacer posible dicho escenario: el avance republicano posterior a las elecciones del año pasado, significó una hegemonía mayor del Congreso y del Poder Ejecutivo. Inclusive, dentro de la misma alianza en el poder, la fracción que podemos denominar “tejana”, consiguió imponerse sobre los sectores más “centristas”.

El aspecto más visible y notorio fue el desplazamiento de Colin Powell en el Departamento de Estado. Esto consolidó el bloque político vinculado principalmente con la rama energética. Los intentos actuales siguen el mismo camino pero en el poder judicial. Estos intentos generan la reacción del Partido Demócrata, que cada vez ve más complicada la cohesión de la alianza que él representa. Por su parte, la UE debe recurrir a soluciones transaccionales debido a la incapacidad de cualquiera de las formaciones políticas que la componen, de imponerse sobre el resto. Por el momento, el elemento que incline la balanza parece buscarse en alianzas con bloques políticos externos al espacio de acumulación.

Las alianzas políticas en EE.UU. profundizan el enfrentamiento político.

Tres hechos ejemplifican la envergadura del enfrentamiento entre republicanos y demócratas y permiten inferir la importancia de disponer de capacidad de resolución.

- Designación de jueces federales: “Existen pocos terremotos políticos auténticos en la política norteamericana, el anuncio de retiro de la jueza de la Suprema Corte Sandra Day O’Connor califica como tal. Su retiro significa una batalla por el nombramiento del reemplazante, con el balance ideológico de la Corte Suprema y el futuro de aspectos sociales centrales firmemente en manos del Presidente Bush. La Corte Suprema es el único poder donde los conservadores no han podido obtener la voz dominante” (WP 2/7). Las dificultades que mencionamos en análisis anteriores en el nombramiento de jueces federales de apelaciones súbitamente se ve engrosado por un hecho previsible pero inesperado. En rigor, se esperaba la generación de una vacante en la Corte Suprema por la enfermedad de su presidente William Rehnquist. El duro enfrentamiento en el Senado por la confirmación de jueces recién comienza. El estancamiento que ya se produjo en los jueces de apelaciones condujo a la formación “de un grupo de 7 senadores republicanos y 7 demócratas que firmaron un acuerdo el 23 de mayo, según el cual una nominación judicial sólo sería bloqueada en circunstancias extraordinarias” (WP 4/7). Este acuerdo hoy parece tener seriamente afectada su capacidad de maniobra. Los demócratas comenzaron a atrincherarse apenas conocida la noticia. El correr de los días fue confirmando sus presentimientos, las versiones indicaban que “cinco jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito⁴, considerada la más conservadora y que cubre Texas, Louisiana y Mississippi, son mencionados como candidatos a

⁴ 20 años atrás era profundamente progresista, al impulsar en el sur racista el cumplimiento de legislación por derechos civiles y sociales. Actualmente ha completado un giro de 180°: resulta extraordinaria la cantidad de veces que la Corte Suprema, que ya es bastante conservadora, debió castigar a la corte de apelaciones del quinto circuito en casos que mostraban procedimiento legal o policial ilegales, discriminación racial, o reviendo fallos anticonstitucionales.

ocupar la vacante: Edith Brown Clement, Emilio Garza, Edith Hollan Jones, Priscilla Owen y Edward Prado, sólo éste último tiene chances de ser aceptado por los demócratas” (WP 19/7). Finalmente, la elección del presidente Bush a ser considerada por el Senado recayó en John Roberts Jr.⁵, nombrado en 2003 como juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (considerada la segunda corte del país luego de la Corte Suprema). La poca oposición demócrata en dicho nombramiento debe haber constituido toda una estrategia para limitar el espacio para el bloqueo en el Senado. Asimismo, al ser tan reciente el mismo, quizás permita acelerar el proceso, pues gran parte de la documentación e investigación fue acopiada para el anterior nombramiento. Si bien en *Análisis* anteriores determinamos que el peso de la tarea judicial recae en las Cortes Federales de Apelaciones, el lugar de la Corte Suprema es central en la conformación de las alianzas por su rol en cuestiones ideológicas y sociales como el aborto, la relación de la iglesia con el estado, etc. En este punto, lo que constituye un intento de cementar la alianza propia se asemeja, por la negativa, con los intentos de minar las bases de la alianza rival.

- Ruptura en la AFL-CIO. En ocasión de celebrar sus 50 años de existencia, la mayor organización sindical norteamericana, la AFL-CIO, “con 56 sindicatos y trece millones de afiliados hasta este momento, sufrió la retirada de dos importantes gremios: Servicios (S.E.U.I. por sus siglas en inglés) con 1,8 millones de afiliados y Camioneros (Teamsters) con 1,4 millones. Esto supone una pérdida de un cuarto de sus afiliados y un sexto de las contribuciones” (NYT 26/7). A estos se podrían sumar otros dos (U.F.C.W., alimentación y comercio, y U.H., hoteleros y gastronómicos) que realizaron un boicot a la convención. James Hoffa Jr., presidente de los Camioneros, sostuvo como uno de los motivos el “dramático incremento del dinero que se vuelca a las campañas políticas”. Tratándose de un sector principalmente aportante al Partido Demócrata, despertó ansiedad en las filas de ese partido, como reveló David Axelrod, consultor demócrata: “la Casa Blanca, el Partido Republicano, desearían ver a los trabajadores fuera de juego como fuerza política” (NYT 26/7). Pero esto no es nuevo: “el S.E.U.I. rompió filas el año pasado al aportar a la Asociación de Gobernadores Republicanos 575.000 dólares, la mayor con-

tribución individual de la organización. Los Camioneros, por su parte, tienen un largo historial de apoyo a los republicanos. Los relamidos conservadores anunciaron que intentarán profundizar la ruptura. La National Right to Work Legal Defense Foundation anunció planes de aportar 2 millones de dólares para asistencia legal gratuita a aquellos trabajadores que busquen separarse del sindicato y suspender el pago de aportes” (WP 27/7). Entonces, en ambas alianzas podemos ver una frágil consolidación, que se intenta compensar con un mutuo ataque a la oposición para recomponer el balance de poder. No es descabellado pensar que con dicha actitud, el descrédito recaiga sobre todo el sistema político.

- Las intencionadas filtraciones de la Casa Blanca. Los demócratas solicitaron la renuncia del principal asesor presidencial y dieron cuerpo al contraataque dirigido a quebrar la alianza política representada por la administración Bush. Aducen filtración a la prensa de datos confidenciales. “Los documentos entregados por la revista *Time* a un fiscal del Departamento de Justicia revelan que fue Karl Rove, amigo y consejero político del presidente y principal estrategia del Partido Republicano quien filtró a varios periodistas el nombre de una agente secreta sólo para incomodar a su marido, un diplomático que se había opuesto abiertamente a la invasión de Irak” (WP 4/7)⁶.

Los dos proyectos de Unión alteran Europa.

En *Análisis*... anteriores hemos señalado que el conflicto en torno a la construcción europea no se ciñe únicamente a la polémica entre una “Europa social”, con crecientes niveles de inclusión, y una “Europa del capital”, tendiente a acentuar la subordinación del trabajo al capital. La “Europa del capital” tiene en realidad dos vertientes. Una es la representada por el llamado “*eye franco-alemán*”, que auspicia la unificación política del espacio de acumulación europeo, al que concibe más como competitivo que como complementario del norteamericano. La segunda vertiente es la comúnmente denominada “atlantista”, indudablemente liderada por Reino Unido.

Las dos caras de la Europa “Atlantista”. Para los atlantistas, el objetivo de la construcción europea es consolidar un mercado abierto de bienes y capitales, integrado —y relativamente subordinado— al capital norteamericano. En esta visión, el capital financiero britá-

⁵ El candidato dispone de credenciales republicanas impecables, que se remontan a 1981, cuando comenzó a desempeñarse en la administración Reagan. Luego ocupó varios cargos durante la presidencia de Bush padre, inclusive asistente del actual presidente de la Suprema Corte, William Rehnquist. Perteneció a la conducción de la organización conservadora Sociedad Federalista durante 1997 y 1998. Esta entidad fue creada en 1982 por las inquietudes conservadoras ante lo que percibían un vuelco a la izquierda del Poder Judicial. Además, se hizo famoso por representar exitosamente a Toyota en 2002, en un fallo que limitó el uso de la ley para discapacitados por parte de los trabajadores. Sus 50 años lo perfilan para un largo mandato pues los cargos son vitalicios.

⁶ Hace dos años el diplomático Joseph Wilson acusó al gobierno de EE.UU. de manipular los datos de los servicios de inteligencia para crear falsos argumentos que justificaran la invasión de Irak. Wilson había viajado a Níger por encargo de la CIA para investigar si Saddam Hussein había tratado de hacerse con uranio en ese país. Demostró que la trama era ficticia y lo transmitió a la Casa Blanca. Pese a ello Bush repetía y sostenía esa acusación falsa. Ocho días después de revelada esa información en una carta abierta en el NYT, varios periodistas revelaron la identidad de la agente encubierta Valerie Plame, esposa del diplomático. Develar la identidad de una agente encubierto es un delito federal grave, con penas de 10 años o más de cárcel.

nico —concretamente, la *city* londinense— cumpliría una función de “*cabeza de puente*” para el desembarco del gran capital norteamericano en la UE. “*La rivalidad entre Blair-Chirac está en los orígenes de esta nueva crisis. Encarnan concepciones distintas del proyecto europeo. El primero busca una mayor liberalización comercial y financiera. El segundo apoya más un contrapeso a la hegemonía declinante del dólar estadounidense. En el proyecto neoliberal de Blair se pasea el fantasma de Margaret Thatcher. En el de Chirac, los sueños de grandeza de De Gaulle*” (EP 22/6).

Esto explica que el reclamo de la Europa social, cuya expresión más concreta fue el rechazo a la constitución europea en el plebiscito francés de fines de junio, y el consecuente debilitamiento del eje, haya tenido como correlato una ofensiva de los atlantistas. En julio, encaramado sobre la presidencia semestral de la UE, Blair logró frenar el proceso de ratificación constitucional y el acuerdo sobre el futuro presupuesto europeo, condicionando de paso la existencia de la política agraria común (PAC) —un punto que Francia considera no negociable— al mantenimiento del “*cheque británico*” (un retorno que Reino Unido recibe sobre sus aportes a la UE desde los tiempos de Thatcher y que el resto de los miembros considera un privilegio inaceptable). En su discurso de asunción, Blair expresó ante el Parlamento Europeo sus concepciones acerca de la naturaleza política de la UE y sobre el rol que le cabe a Europa en el marco de la globalización: “*Debe resultar de una alianza entre gobiernos nacionales y estados soberanos (...) Europa debe reformarse y modernizarse para enfrentar la competitividad de China y la India y la globalización*” (LF 1/7). La reforma implica una baja generalizada de los impuestos al capital y una flexibilización de las normas europeas sobre la jornada máxima de trabajo semanal de 48 horas.

Como vimos en la sección *Seguridad*, el proceso de construcción de la Europa atlantista avanza no sin contradicciones. Los atentados del 7 de julio le han permitido a sus impulsores claros avances en uno de los *leitmotiv* claves que lo emparentan con la política exterior norteamericana: la “*lucha antiterrorista*”. Pero las contradicciones emergen de manera más visible en lo que constituye su contracara, la liberalización del espacio de acumulación europeo.

Incertidumbre sobre el futuro del eje franco-alemán

El fracaso en el plebiscito constitucional aceleró el desgaste del gobierno de centro-derecha en Francia. El primer ministro que encarnaba el paquete de reformas, Raffarin, debió abandonar el gobierno mientras la popularidad de Chirac cayó al punto más bajo en tres años. En Alemania, el gobierno social-demócrata logró la moción de censura del Parlamento que necesitaba para la convocatoria a elecciones anticipadas (ver *Análisis* 60) en las que intentará quebrar a la oposición de demócratas y social cristianos (CDU-CSU). Estos últimos, por su parte, se han manifestado entusiastas del

programa paneuropeo de reformas que encarna Blair, lo que echa sombras sobre el futuro del eje. La primera candidata, Angela Merkel, tuvo una serie de reuniones privadas con el premier laborista, mientras que el presidente de los social cristianos bávaros, Edmund Stoiber, se encarga de dejar en claro las coincidencias del CDU-CSU con la “*Nueva Europa*” que gusta evocar la diplomacia norteamericana: “*Europa y América tienen que ser dos caras de la misma moneda (...) la Europa de los 25 no se puede impulsar con el motor franco-alemán (...) Necesitamos el impulso de Gran Bretaña, Polonia, España e Italia*” (EP 4/8).

Sin embargo, la crisis de la social-democracia terminó por producir la esperada alianza de izquierdas que anticipábamos en *Análisis* 60. Se formalizó el frente electoral resultado de la unión entre poscomunistas del este (Partido de Izquierda - PDS) y ex socialdemócratas del oeste (Alternativa Electoral - WASG). Sus candidatos, Gregor Gysi (PDS) y Oskar Lafontaine (WASG) presentaron un programa “*contra el neoliberalismo*”, en el que proponen subir el salario mínimo y las jubilaciones, rebajar la jornada laboral, mayor control de los mercados financieros, suba de impuestos sobre papeles de Bolsa, así como sobre altos ingresos, sucesiones y donaciones. Según Gysi, “*los objetivos de la social democracia y los nuestros son actualmente contrapuestos*” (LF 6/8). La alianza alcanza en las encuestas entre un 9 y un 11% de los votos; curiosamente parece haberle quitado más espacio a la derecha que a la socialdemocracia: los votos de la izquierda y centroizquierda sumados superan sorpresivamente a los del CDU-CSU por 49 a 47 % (EP 6/8). Lo que probablemente muestra que el crecimiento de la centro-derecha obedecía más al desaliento de la población para con las claudicaciones del gobierno de Schroeder que a la atracción de las consignas pro-empresariales que enarbola la alianza CDU-CSU.

América Latina

En la región continúan los casos de corrupción que ponen en jaque a varios gobiernos y que generan descontento en el pueblo sobre las “democracias actuales”. La situación que atraviesa Brasil es ejemplo de ello y permite sacar a la luz la incapacidad del sistema representativo de resolver las necesidades de la gente. La compleja estructura de alianzas en la que se montó, primero el gobierno de Fernando H. Cardoso (PSDB), y ahora el de Lula (PT) dejan en claro que estos casos de corrupción, y todas las irregularidades que se destaparon en la principal potencia sudamericana, no son otra cosa que el normal funcionamiento de las relaciones políticas, expresión de los intereses encontrados de las diferentes corporaciones, así como de la presión por salvaguardar y conseguir “negocios” para todos.

Los intentos de alejar a los líderes del PT y sobre todo a Lula, buscan ocultar estos factores estructurales y rescatar a políticos que todavía mantienen cierta imagen positiva en la sociedad, para lograr cierto margen de gobernabilidad.

Pelea por las ganancias

El CAFTA como ensayo hacia el ALCA

Mientras el MERCOSUR sigue envuelto en conflictos comerciales entre sus miembros más importantes – Brasil y Argentina tienen conflictos que afectan al 10% del intercambio entre ambos países–, el gobierno de George Bush ha logrado avanzar en el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), al lograr en el Congreso de su país la aprobación del TLC con El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y República Dominicana.

El CAFTA (llamado así por sus siglas en inglés) creará un mercado de US\$ 30.000 millones y ofrece muy poco, pues se limita “esencialmente a hacer permanente un conjunto de preferencias temporales que ya disfruta la región” (WSJ 29/7). En contraste, EE.UU. ofreció a México, durante su incorporación al NAFTA, acceso al mercado automotriz estadounidense, entre otros incentivos económicos totalmente ausentes en la conformación del CAFTA. Además, las organizaciones sociales centroamericanas afirman que la instalación de nuevas em-

presas no redundará en mejoras salariales y temen una explotación de EE.UU. en la rica biodiversidad de la región.

Por otro lado, la administración Bush, parece estar dispuesta a no ceder más terrenos a los gobiernos que se oponen a su política (sobre todo el eje Caracas-La Habana). Esto genera que los frentes de disputa se vayan generalizando y haciendo cada vez más visibles: ataques sistemáticos a Chávez, pelea por elegir director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –donde finalmente se impuso el candidato de EE.UU.–, pedido de inmunidad de tropas, y avances en la firma de acuerdos comerciales que buscan no la complementariedad económica sino la apertura de las economías y la eliminación de las fronteras nacionales (como ocurrió con el Tratado de Libre Comercio –TLC– firmado entre EE.UU. y Centroamérica).

A raíz de estas disputas, en las que también juegan Brasil y Argentina, la próxima Cumbre de las Américas se torna como el encuentro más importante en el terreno político de este año. Allí, las diferencias ya comienzan a ser sustanciosas, prometiendo nuevos enfrentamientos.

El gobierno de Bush, tal como lo ha afirmado en toda su gestión, promueve este tipo de acuerdos en el marco del desarrollo del libre comercio y el espíritu de libre empresa para la consolidación de la democracia. Según Bush, “(...) tenemos que ayudar a que estas jóvenes democracias se desarrollen” (LN 18/7), asegurando que el tratado traerá “más seguridad, estabilidad y libertad para occidente” (El País, edición internacional 29/7). En este sentido, John Maisto, representante de EE.UU. ante la OEA, previendo las futuras negociaciones con el resto de los países latinoamericanos, destacó que “el CAFTA fortalecerá nuestra habilidad para promover de manera creíble el libre comercio en la región” (LN 28/7). Quizá por su ensayo hacia, y en busca de, el gran proyecto llamado ALCA, Bush calificó a este acuerdo como de importancia “geopolítica e interés nacional” (C 28/7).

generar un consenso mínimo como el que primaba en los años '90 (denominado Consenso de Washington). Apoyados por los cancilleres del grupo Río⁷ (conformado por diecinueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Sal-

Coyuntura Política

La Cumbre de las Américas y la imposibilidad de consensos totales

La cuarta Cumbre de las Américas –que reúne a todos los jefes de Estado del continente (a excepción de Cuba)– tendrá lugar en Mar del Plata, en los días 4 y 5 de noviembre. Se trata del encuentro más importante en esta segunda parte del año.

A mediados del mes de julio, se evidenciaron dos posiciones encontradas sobre los ejes que tendría que tener la cumbre, lo que demuestra la imposibilidad de

⁷ Este grupo se define como un organismo de trabajo sobre los conflictos comunes de la región que promueve la defensa de los valores institucionales y democráticos de cada uno de los países que lo conforman. No es considerado un foro oficial pero tiene una referencia fuerte para los países de la región.

vador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, y un representante rotativo de la Comunidad del Caribe), la delegación anfitriona – Argentina – propuso como eje resolver el problema del trabajo y la pobreza. El lema propuesto para la cumbre se sintetizó en: “*Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática*”. El poner el eje en el trabajo lo enfrentó a la posición de EE.UU. y Canadá (apoyada parcialmente por Chile) que buscaba resaltar la lucha contra la corrupción y garantizar el principio de libre empresa. Esto último también está enfrentado a la posición de Argentina, Brasil y Venezuela, que defienden la participación del Estado en materia económica, política y social.

El canciller argentino, Rafael Bielsa, al hablar sobre el eje de discusión de la futura cumbre, afirmó que éste “*tiene que ver con un problema real de la región y no con problemas conceptuales. En el interior del Grupo Río no hay ninguna diferencia con el lema ni con el modo de abordarlo*” (LN 23/7). La posición norteamericana la defendía su embajador ante la OEA, John Maisto: “*Si las reformas de los ’90 fracasaron fue porque sus gobiernos fueron corruptos, no porque las medidas fueron erróneas*” (LN 18/7).

Todos coincidieron en que hace falta soluciones concretas y programas o resoluciones que se puedan aplicar en el corto plazo. La dificultad, obviamente, está en qué se entiende por los problemas que atraviesa la región.

Finalmente, la posición Argentina prevaleció y esto hizo despertar los temores desde los responsables de la casa Blanca de que nuevamente se asista a un fracaso, como viene ocurriendo en las últimas cumbres. Si esto sucede, ahondaría aún más las diferencias entre EE.UU. y los países de la región (sobre todo sudamericanos).

Por las dudas, el vicescanciller argentino Jorge Taiana, resaltó: “*El ALCA no será debatido en esta cumbre*” (LN 28/7).

La corrupción nuestra de cada día

Como repetición de algo ya ocurrido una y otra vez en Latinoamérica, la alianza que encabeza el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil está empantanada en el mayor escándalo de corrupción que atraviesa el país. Esto no es más que el último recordatorio de la constante de corrupción que ha caracterizado a la política latinoamericana desde época colonial.

Las “*democracias*” han demostrado ser ineficientes en su propuesta de lograr la “*participación*” de la población y de sostener un “*justo*” reparto de la ganancia. Las encuestas citan a la corrupción como causa de la desilusión y el escepticismo que cunde en toda la región. Este sentimiento se vio canalizado en levantamientos populares, que derrocaron cinco jefes de Estado en los últimos cinco años. Edgar Villanueva, un legislador que está al frente de varias investigaciones sobre la gestión de Alejandro Toledo en Perú (una docena de sus

parientes están acusados de usar influencias en su beneficio), caracteriza la situación: “*En América Latina, la persona que esta en el poder siempre mantiene ataduras con su pequeña base de poder, y olvida sus promesas*” (LN 1/8).

La caída del presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez; el sospechoso manejo de fondos de caridad en el que se ve implicada la mujer de Fox, presidente de México; los casos que salpican al elogiado (por parte de los medios de comunicación y los organismos internacionales de crédito) gobierno de Lagos en Chile; y la condena al ex presidente de Nicaragua, por utilizar fondos en su propio beneficio, no son más que algunos ejemplos de los tantos que podrían citarse. Todo esto demuestra que no se le puede confiar la resolución de nuestros problemas a quienes no hacen más que legislar lo ejecutable para beneficio de unos pocos.

La magnificencia del caso brasileño es lo que nos sirve para entender que la democracia no es una cuestión de personas sino de las relaciones sociales necesarias para el funcionamiento de todo el entramado político, en busca de la reproducción del capital.

Brasil: no se salva nadie

En el *Análisis* anterior marcábamos la necesidad del gobierno de Lula de contar con el apoyo de legisladores de otros partidos, para garantizar la gobernabilidad, mediante la aprobación de las leyes que exige el Poder Ejecutivo. Éste es el fin que persigue la “*compra de voluntades*” a miembros del Partido Progresista (PP), el Partido Liberal (PL) y el Partido Laborista Brasileño (PLB). Las denuncias de estas relaciones *non sanctas* las realizó Roberto Jefferson, presidente del PLB, que en otros tiempos, como diputado, fue ladero fiel de Fernando Collor de Mello. Recordemos que éste último debió renunciar a la presidencia, acusado de innumerables casos de corrupción.

Los que cayeron en esta circulación de prebendas son 18 funcionarios de empresas públicas (Correos e Instituto de Reaseguros). Más tarde, ante el agravamiento de la crisis, debió renunciar José Dirceu a la jefatura de Gabinete.

La cúpula del Partido de los Trabajadores (PT), que en un principio se desligó del asunto (ver *Análisis de Coyuntura* N° 61), quedó involucrada cuando su tesoro, Dalubio Soares, se vio obligado a renunciar, acusado de intermediar en los pagos de sobornos. Por esta misma causa, dimite José Genoino, presidente del PT, y Silvio Pereira, secretario general de la organización. En un principio, el esquema de corrupción se cerraba en estos personajes, que actuaban en el marco de un mecanismo aceitado por el publicista Marcos Valerio.

Los cruzados

Aprovechando esta situación y tratando de no verse involucrados en esta compleja red, los dos partidos opositores más importantes, el Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB) y el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), intentan involucrar al propio presidente Lula en el escándalo.

Como respuesta, Lula concedió a dos diputados del PMDB dos ministerios (que se suman a los que ya tenía este partido). A estos “cruzados” Michel Temer, presidente del PMDB, les prometió la desafiliación. El PSDB, en palabras del Presidente del bloque de Diputados, Arthur Virgilio, dijo de Lula: “*Es un idiota en la mejor de las hipótesis, si no sabía, y en el peor es un corrupto*”. Y agregó: “*Terminemos con esta historia de que Lula no sabe lo que pasa*” (C 15/7). El senador Agrifino Maia, del Partido del Frente Liberal (PFL) se sumó a las acusaciones: “*Claro que Lula sabía lo que pasaba, es imposible que no estuviera al tanto, estamos hablando de gente con la que lleva conviviendo 30 años*” (EP 17/7).

¿Sólo un crimen electoral?

Dalubio Soares, el primer implicado, admitió que con fondos no declarados se pagaron las campañas electorales, legislativas y gubernamentales de 2002 y las municipales de 2004: “*Todos los parlamentarios saben cómo se financian las elecciones*” fue su justificación, negando al mismo tiempo el pago de sobornos a diputados. José Dirceu, en su defensa, optó por negar todo acto posible de corrupción en este gobierno y en su alegato les recordó a los brasileños aquéllos en los que había incurrido el último gobierno de Cardoso (PSDB, 1998-2002). Según Dirceu, el PSDB, con el apoyo mediático del diario *Folha de Sao Paulo*, intenta desplazar al PT gobierno.

El modelo que involucra a todos.

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), en sus investigaciones, llegó a la conclusión de que el esquema de manejo de fondos clandestinos no fue montado por la ex dirección del PT. El sistema tiene siete años de antigüedad y quien lo puso en funcionamiento fue el PSDB, para la campaña electoral de 1998, en donde resultó electo Cardoso. El modelo es bastante simple. Su arquitecto, Marcos Valerio, tomaba dinero de los bancos usando como garantía los multimillonarios contratos de publicidad que los gobiernos les firmaban. De esta plata salían fondos para financiar campañas electorales y el soborno para los congresistas. En esta red de distribución quedaron implicadas también dos entidades judiciales: el Instituto de Magistrados del Distrito Federal y la Asociación de Jueces Federales de Brasilia. El Frente Nacional de Intendentes (agrupa a 5500 alcaldes de Brasil) también fue regado con recursos irregulares, su receptor sería Luis Paulo Veloso Lucase, miembro del PSDB.

Por este partido, quedó salpicado su presidente, el senador Eduardo Azeredo, que entre 1998 y 2002, como gobernador de Minas Gerais, facilitó la obtención de contratos de publicidad a la agencia de Valerio. Este dinero fue a parar, como “*sobresueldos*”, a por lo menos los bolsillos de 70 políticos vinculados al actual senador.

El colmo de todo fue la comprobación de la CPI de que el legislador Ibrahim Abi-Akcel, del PP, que ocupa un cargo muy activo en la Comisión Parlamentaria, re-

cibió pagos “*no declarados*” que salieron de la misma cuenta investigada. Esta cuenta de Valerio en el Banco de Brasil (estatal) tuvo, en los últimos cinco años, aporte por U\$S 70 millones que presuntamente vinieron de 27 empresas. Entre los que cotizaban, con 27 millones durante el gobierno de Cardoso, se encuentra Daniel Dartas, dueño del banco Opportunity, favorecido por dicho gobierno con la privatización de la telefónica Nacional Telebras. Durante el gobierno de Lula, el mismo personaje siguió aportando a las cuentas de Valerio pero en el Banco Rural (privado).

Al cierre de esta edición, dos pedidos de investigación contra el presidente Lula fueron presentados por dos abogados de San Pablo. El presidente de la Cámara de Diputados Severino Cavalcanti (PP, de derecha y aliado al gobierno) evaluaba como insuficientes las pruebas presentadas. Por otro lado, los pedidos de destitución de legisladores ascendían a 23. El presidente de la Cámara intentaba por todos los medios llegar a un “*acuerdo*” para evitar que los involucrados pierdan su mandato y contribuyan así a engrandecer la degradada “*situación democrática*” en la que se ve inmerso todo el continente.

Más realista fue la voz del dirigente histórico del PT en Río Grande Do Sul, Tarso Genro, actualmente presidente interino del PT y Ministro de Educación, quien llamó a “*exponer nuestras entrañas, nuestros errores y no sólo entregar media docena de cabezas en la bandeja, así como debemos explicar cómo llegamos a tal descabro*”. Y vaticinó: “*Aún sucederán acontecimientos políticos en los próximos días y meses con muchas sorpresas. Vamos a recoger frutos muy amargos*” (EP 27/7).

Apunten contra Chávez

El frente interno

En los momentos en que se cierra esta edición, Venezuela se preparaba para otra “*batalla*” electoral. Se trata las elecciones municipales, que tienen como trasfondo la consolidación del proyecto bolivariano encabezado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Pronosticando una derrota, la oposición se lanzó nuevamente a la confrontación (con cierta importancia luego de la derrota del referéndum de agosto del año pasado que ratificó a Chávez), llamando una vez más a desconocer al gobierno.

Esta vez, el enfrentamiento fue con sectores de la Iglesia⁸. El cardenal Rosalio Castillo acusó a Chávez de ser el presidente “*más nefasto que ha tenido Venezuela*”, sintetizando que en el país “*no hay democracia ni estado. Lo que tenemos es un barniz de democracia*”. Por eso, llamaba al pueblo a “*desconocer cualquier régimen que sea contrario a la democracia*” (C 18/7). Chávez enseguida replicó: “*Me da tristeza y asco, es un golpista, un bandido, un inmoral,*

⁸ Hay que recordar que la jerarquía eclesiástica tuvo una gran participación en el golpe de Abril de 2002, que sacó por dos días a Chávez del poder.

alcabuate (de los gobiernos pasados), fariseo hipócrita” (LN, 19/7).

Por su parte, sectores de la oposición nuevamente han organizado marchas en busca de transparencia electoral, llamando a la abstención de las elecciones municipales; sectores que siguen fracturando a la ya fracturada oposición, al debilitar a los sectores contrarios a Chávez que sí eligieron la pelea electoral.

Por su parte, en otra avanzada, Chávez anunció la expropiación de más de 1.800 empresas que están cerradas o parcialmente utilizadas, en un plan para transformar la capacidad productiva en Venezuela. La idea es establecer sociedades mixtas, formadas entre patrones y trabajadores en cooperativas, en muchos casos orientando a estas empresas a una producción social. Según Chávez, *“el que tiene tienda que la atiende o la venda, y si no, la expropiamos”* (LN 19/7). Y agregó, interpelando al empresariado: *“Empresarios venezolanos, las puertas están abiertas para firmar un acuerdo marco y un proyecto específico, si quieren financiamiento se lo damos, con intereses bajos y medidas flexibles, siempre y cuando los empresarios les den participación a trabajadores en dirección y beneficios de las empresas. Aquí están estas manos para darle forma a este nuevo modelo de producción”* (LN 19/7).

Esta ofensiva de Chávez se basa en la Constitución Bolivariana, que garantiza la propiedad privada, pero que prevé que *“por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”* (LN 19/7).

El frente externo

Que un gobierno declare que el *“camino es el socialismo”* –tal como lo afirmó en febrero pasado en el último Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre–, que haya anunciado y concretado desde hace más de un año una amplia reforma agraria –la cual ya dejó varios muertos en las filas bolivarianas, producto del enfrentamiento entre campesinos y terratenientes ganaderos–, que amenace con la expropiación de empresas –cómo recién acabamos de ver–, que establezca relaciones permanentes y estrechas con Cuba y que proclame la

unidad latinoamericana en franca oposición al ALCA, genera que diferentes gobiernos y sectores de todo el establishment se pronuncien en contra del proceso bolivariano.

De esta manera, un informe presidido por Fernando Cardoso (el mismo responsable del sistema de alianzas que hoy es escándalo en Brasil, como vimos arriba), a partir del instituto Diálogo Interamericano, ubicó tanto a Haití como a Venezuela como dos países que *“difícilmente califican como democracia”*, afirmando que *“Chávez ha restringido severamente la competencia democrática y provocó un extensivo daño en las instituciones de la Nación”*. También califica a Venezuela como *“una fuente potencial de inestabilidad regional”* (LN 15/7).

Por su parte, desde EE.UU. se pronunció el entonces secretario adjunto para América Latina (que renunció hace poco días) Roger Noriega. Apuntó en la misma dirección que Cardoso, al acusar a Venezuela y Cuba de alentar el caos *“en Bolivia y otros países”* de la región. Para Pardo Maurer –el funcionario de mayor jerarquía del departamento de Defensa para la región– Chávez y Castro *“están tratando de conducir la Revolución (en Bolivia) hacia un estado populista marxista-socialista”* (LN 28/7).

Noriega terminó rematando que, al no haber casi nada de contacto político o diplomático entre su país y Venezuela, *“en el futuro previsible, nuestros esfuerzos diplomáticos en Venezuela estarán humanamente destinados a influir en acontecimientos a través de declaraciones públicas y contactos privados con otros gobiernos y organizaciones”* (LN 28/7).

Por su parte, el propio gobierno de Bush, ante la nueva señal de televisión TELESUR (en la que participan Venezuela, Argentina y Uruguay), que busca ser una alternativa a las grandes cadenas televisivas norteamericanas (y aquellas regionales pero que son socias de aquéllas), indicó que se emitirán transmisiones de radio y TV en Venezuela para contrarrestar este fenómeno.

Según Chávez, *“el gigante imperialista está entrando en una etapa peligrosa de desespero. No hay nada más peligroso que un gigante desesperado”*.

Seguridad

Militares en Uruguay: del perdón a la (parcial) revisión

En sintonía con lo acontecido cuando Kirchner asumió la presidencia e inició un cambio en la relación entre el gobierno del estado y la corporación militar, en torno al accionar de estos últimos en la dictadura militar, Tabaré Vázquez se enfrentó a sectores militares involucrados en la ola represiva que también azotó al país del Este. Así, el primer mandatario ratificó su postura anunciada a fines de junio pasado, donde había declarado que *“no dará un paso atrás en su política de derechos humanos y que no tolerará ningún planteo militar”* (C 16/07).

Hasta el momento, el sector militar gozaba de un tático acuerdo con los partidos políticos tradicionales, blancos y colorados. Éste se basaba en no volver a poner en cuestión lo sucedido en la dictadura, amparándose en la existencia de la famosa Ley de Caducidad–que rige desde 1986 y que impide juzgar a los militares del último proceso (ver más abajo)– como así también en no darle curso a las causas que estén por fuera de la ley. La excepción había sido la situación de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, en donde el presidente anterior, Batlle, tuvo que girar su política y acceder al reclamo.

En Argentina, no hace mucho tiempo, se resolvió declarar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y

Punto Final. En Uruguay, por el contrario, ese parece ser el límite y nadie está pensando en rever aquella Ley de Caducidad, que es la que opera con los mismos fines que las llamadas “*leyes del perdón*” en Argentina. Pero la no revisión, según interpreta el gobierno de Tabaré, no impide actuar donde la ley no tiene incidencias.

El revisionismo de Tabaré.

Con la excepción mencionada del caso Gelman, ningún gobierno desde 1985 en adelante había pensado en un proceso de “*revisión*” sobre la cuestión militar. Esta situación generó la obvia tensión con los militares retirados que fueron partícipes del último gobierno de facto y que el gobierno llamaría a declarar en varias causas sobre la desaparición de alrededor de 200 personas. Los hombres de traje verde oliva anunciaron que resistirán “*armados*” las citaciones judiciales. Esta situación hizo hablar al jefe del ejército, Bertolotti, quien intentó alinear a todos los generales detrás de la decisión de Tabaré, acción que encontró desacuerdo al interior de los altos generales y generó tensión al interior de las fuerzas armadas.

Ahora bien, el gobierno actual no tiene el objetivo de cargar contra la Ley de Caducidad e intentar declarar su nulidad, simplemente interpreta que la ley no impide entablar acciones legales contra los militares por situaciones previas al golpe de estado de 1973 que dio comienzos a la dictadura, como así tampoco contra el accionar de los responsables de los secuestros y asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, ocurridos en Buenos Aires en 1976. A esto se suma la interpretación de que la ley no impide la extradición por juzgamientos en el exterior. Además, el Estado se reserva el derecho de investigar el robo de bebés y otro tipo de violaciones a los derechos humanos que no están contenidas por la Ley de Caducidad.

El poder militar sabe que la revisión de Tabaré no tiene el objetivo de anular la ley, esa es una de las cartas con la que juega la conducción militar actual, y que permite el apoyo a la medida oficial y el no respaldo a los militares retirados y que serán citados a declarar. De esta forma, “*aunque la estrategia del presidente está destinada a hallar restos de desaparecidos en unidades militares y enjuiciar a algunos responsables de la represión que fueron más allá de los lineamientos oficiales de la dictadura, el mandatario no piensa en derogar la ley de caducidad ni hacer una revisión total de lo actuado*” (LN 21/7). Por lo tanto, “*el revisionismo quedará acotado a casos extremos*” (LN 18/7).

Esta puede haber sido la cuestión por la que los militares retirados, luego de amenazar resistirse en armas, declararon que acudirán a las citaciones judiciales. Lo cierto es que este giro que el gobierno de Tabaré produjo sobre la cuestión militar y de los derechos humanos, y que tiene su consonancia con lo ocurrido en Argentina —aunque con diferente forma—, es parte de cómo se interpretan las acciones del reciente pasado en este esquema de relación de fuerzas en el Cono Sur de los últimos dos años.

Paraguay: la nueva “*cabecera de playa*” norteamericana

Tal como lo anunciamos en la edición anterior, en mayo del corriente año, la Cámara de Senadores de Paraguay otorgó total inmunidad al personal civil y militar de EE.UU. que participará de los trece ejercicios militares pautados con la administración de Nicanor Duarte Frutos en territorio guaraní.

Durante el pasado mes de julio, treinta y seis miembros del Comando Sur de Estados Unidos iniciaron sus actividades brindando atención médica odontológica y sin costo a los pobladores de Yasy Cañy, a 230 Km. al noroeste de la ciudad de Asunción. Mientras que para los próximos días se espera el arribo de Agustín Rodríguez, representante regional del FBI, y de miembros del Pentágono, quienes asistirán al Poder Ejecutivo local en la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad. El objetivo de estas visitas es coordinar la apertura de una dependencia de la Oficina Federal de Investigaciones en esta ciudad, previsto para el 2006, tal como lo acordaron los gobiernos norteamericano y paraguayo, avanzar en la instrucción de agentes de seguridad local mediante el dictado de cursos anti-terroristas y asesorar en la elaboración de programas de control y combates al delito. Con esto último, las autoridades intentarán contrarrestar la expansión de la criminalidad y los secuestros extorsivos. “*Estamos en un proceso muy dinámico de llegada de gente con la cual hemos llegado a acuerdos en nuestros viajes a Colombia y EE.UU.*” (Reuters 12/7), expresó Luis Castiglioni, vicepresidente de Paraguay, quien encabezó la delegación que viajó, a principios de junio, a Washington para reunirse con Dick Cheney, su par norteamericano⁹.

En tanto, organismos de derechos humanos y partidos políticos de la región continúan manifestando su rechazo y oposición a la intervención de EE.UU. en la política de seguridad interna y al desplazamiento de sus efectivos militares, a quienes el Estado paraguayo aseguró impunidad frente a cualquier delito que pudieren cometer. Denuncian la inminente instalación de bases militares norteamericanas en la región del Chaco paraguayo y en el pueblo de Mariscal Estigarriba, acondicionado con un aeropuerto preparado para que puedan aterrizar aviones capaces de transportar grandes cantidades de tropas y armamentos. Además ha generado suspicacia la cercanía del país a la triple frontera argentino-brasileño-paraguaya, espacio donde Washington viene agitando el fantasma del terrorismo islámico y que contiene una de las reservas subterráneas de agua dulce más importantes del mundo. Paraguay constituye, entonces, un punto estratégico para los intereses imperiales en el Cono Sur (Ver *Análisis de Coyuntura* N°61).

⁹ En el último mes de marzo, pocos días después de conocerse el asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, el presidente Nicanor Duarte Frutos viajó a la ciudad colombiana de Bogotá.

Por su parte, Ecuador, a diferencia de Paraguay, confirmó que no suscribirá a ningún acuerdo que otorgue inmunidad a los militares de Estados Unidos instalados en la base aérea de Manta, desde donde ese país coordina una ofensiva aérea contra el narcotráfico en una amplia zona del océano Pacífico. La embajada de EE.UU. recordó recientemente que la ley de ese país establece que cierto tipo de ayuda financiera y militar está condicionada a la aceptación de un acuerdo que exima a su personal civil y militar de ser juzgado ante la Corte Penal Internacional, por lo que la administración Bush sancionará a Ecuador suspendiendo el suministro de U\$S 7 millones destinados a ayuda militar. Kristie Kenney, la embajadora norteamericana, aseveró que *"Ecuador hasta la fecha no tiene interés en firmar eso, entiendo eso totalmente, es una decisión soberana, pero cada país tiene que respetar sus leyes (...), tenemos que cumplir con nuestras leyes y Ecuador con sus leyes"*.

Para Vladimir Sierra, coordinador del programa de gobernabilidad de la Universidad Católica, la exigencia estadounidense tiene que ver directamente con el Plan Colombia, que *"excede la guerra antidrogas y obedece al interés de Washington por controlar una zona de la Amazonia con grandes recursos naturales"* (La Hora 26/7).

Colombia: Uribe busca aliados extra regionales

En la segunda mitad de julio pasado, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, dio sanción a la denominada Ley de Paz y Justicia, marco jurídico para la desmovilización de los diversos grupos paramilitares que operan en el país.

La intención del gobierno es que con esta ley, aprobada en junio por el Congreso Nacional, se pueda obtener el desarme de veinte mil combatientes de las fuerzas contra-insurgentes antes del 2006, y de esta forma, reincorporarlos a la vida civil.

La Ley permite facilitar la desmovilización de los grupos armados ilegales para lo cual quien se someta a ella deberá confesar los crímenes cometidos durante la militancia en la organización armada y, además, entregar los bienes adquiridos de manera ilícita.

Los integrantes de estos grupos que se acojan a los beneficios de la ley, pero que no confiesen todos sus delitos u oculten alguno de los bienes adquiridos ilícitamente, perderán inmediatamente las concesiones descritas en esa legislación, que, por otra parte, no permite la prescripción de los delitos atroces o de lesa humanidad, previendo penas privativas de la libertad en una cárcel por un período que oscila entre los cinco y los ocho años.

Los alcances y las consecuencias de la ley han generado fuertes controversias en el interior de Colombia y en la comunidad internacional, por lo que Uribe tuvo

que realizar una gira por varios países de Europa para explicar y lograr respaldo a su política de *"seguridad democrática"*, que lo llevó a reunirse con los principales referentes políticos del continente.

Javier Solana, representante de la Política Exterior y Seguridad Común de la UE; Chris Patten, el comisario de Exteriores; Tony Blair, Primer Ministro inglés; Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea; Pat Cox el presidente del Parlamento Europeo; los Reyes de España y Rodríguez Zapatero –quien se comprometió a promover una comisión en la UE que verifique la aplicación de la ley–; y el principal partido opositor de este país (Partido Popular), le han manifestado al presidente colombiano su apoyo a las medidas impulsadas en materia de seguridad interna. Por su parte, George W. Bush también ha brindado un espaldarazo y le concedió a sus FF.AA. la *"certificación"* en Derechos Humanos, un reconocimiento que supondrá el envío de U\$S 62 millones para la lucha contra el narcotráfico y los diversos grupos guerrilleros (EPEI 5/8).

En tanto, John Drury, del equipo de investigación de Amnistía Internacional en Colombia –uno de los destructores de la ley, entre los cuales se encuentran diversas ONG–, decía a BBC Mundo: *"La ley no garantiza el derecho de las víctimas de los abusos de derechos humanos a la verdad y la reparación"*. Además, esta organización internacional por la defensa de los derechos humanos cuestiona a la misma por:

- la ausencia de garantías de un proceso judicial que asegure que las personas acusadas sean llevadas ante la justicia, por lo que si no se presentan a juicio, no se puede pensar en una desmovilización real.
- no asegurar el real desmantelamiento de los grupos paramilitares, ni permitir establecer los vínculos con las fuerzas armadas y otros estamentos de la sociedad.
- consagrar la impunidad a numerosos responsables de crímenes y delitos cometidos en todos estos años de conflicto.

A inicios de agosto, se concretó la entrega de las armas del bloque Héroes de Granada, la mayor de las registradas hasta ese momento, que involucra a unos dos mil miembros. Al cierre de esta edición, se ultimaban los detalles para la desmovilización de una nueva estructura paramilitar, en un proceso que incluye a las llamadas Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada: mil de sus efectivos depondrían las armas. De esta forma, ascienden a más de ocho mil los desmovilizados de diversos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La estrategia del gobierno de Uribe parece consistir en aislar a las FARC de sus contactos políticos en el interior y fuera de las zonas rurales, para, más tarde, realizar una ofensiva total sobre el mayor grupo guerrillero de América Latina.

Argentina

Se da casi por sentado que antes de las elecciones de octubre no se podrá acordar un programa con el Fondo Monetario Internacional, puesto que los requisitos del mismo implican tomar medidas concretas fuertemente antipopulares. Mientras tanto, el presidente, Néstor Kirchner, aprovecha para postular “*a viva voz*” su tan caro proyecto de *desendeudamiento*. Como respuesta, podríamos decir, el Fondo marcó la cancha con un no menos exagerado “*Plan de nueve puntos*”.

Con este contexto externo, la pelea al interior de la burguesía local, y entre las fracciones más concentradas y el gobierno, se desplegó en torno a la cuestión de los

precios. Precios y salarios marcaron los ejes de la disputa local.

Por su parte, la coyuntura política local nos muestra cómo las elecciones de octubre van cobrando forma a partir de los mismos síntomas de descomposición partidaria que venimos observando desde hace tiempo en todo el arco político nacional. Veremos, además, cómo los matutinos Clarín y La Nación participan de la campaña electoral activamente, en una discusión diaria a través de noticias y editoriales con el propio presidente Kirchner.

Pelea por las ganancias

“Adiós al Fondo (y arriba la patria)”

“*Que no nos importen ninguna receta. Desendeudémonos, adiós al Fondo y arriba la patria*” (LN 30/7). Tales fueron las palabras que Néstor Kirchner lanzó en la provincia de Buenos Aires finalizando el mes de julio. Un día antes, el presidente había dicho: “*nos vamos a desendeudar paso a paso y aun en este momento de endeudamiento tampoco vamos a resignar las políticas que la Argentina necesita*” (LN 29/7).

La tesis del *desendeudamiento* a la que recurre el presidente Kirchner suele ser postulada por algunos como un sólido “*Plan B*” que el gobierno guarda bajo su manga en caso de no poder acordar un programa mínimo con el FMI, y supone la “*independencia*” respecto de éste en lo que a delineamientos de política económica interna refiere. Pero otros sostienen que es el propio Fondo el que alienta una política argentina hacia la deuda cuyo criterio sea *pagar a como de lugar*, reduciendo así su “*grado de exposición*” en el país.

Por lo pronto, no hay fracción del capital concentrado en el país que adhiera al “*desendeudamiento*”. Más bien la burguesía local procura acordar con los organismos de crédito, aunque su plan de acción y ajuste implique la desaparición (quiebra) de la porción menos concentrada del capital local. La firma del FMI garantiza la apertura del crédito externo, necesario para que las empresas locales puedan operar.

Por eso, y en contraposición con la retórica presidencial, más que modestas fueron las palabras del enviado a Washington, Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía. En EE.UU. y frente al indio Anoop Singh, Nielsen dijo: “*Vengo a sondear y explorar las posibilidades futuras de un acuerdo*” (C 22/7). Posibilidades futuras. A la exagerada hipótesis del “*Adiós al Fondo*”, el organismo opuso su programa máximo para la Argentina. Publicado como **documento oficial**, el mismo exige al gobierno:

1. pagar los vencimientos de la deuda con las reservas de dólares acumuladas en el Banco Central;
2. comprometerse a un superávit fiscal cercano al 5,1% (el nivel de superávit actualmente prometido por las autoridades argentinas es de 3,8%);
3. flexibilizar o dejar caer el valor del dólar;
4. cerrar definitivamente un acuerdo con las privatizadas;

5. incorporar en los planes de pagos a los acreedores privados que no aceptaron el canje de bonos;
6. otorgar a los bancos compensaciones por los amparos judiciales que favorecieron a los ahorristas;
7. aplicar una reforma impositiva que elimine las retenciones a las exportaciones y el denominado impuesto al cheque;
8. profundizar la Ley de Responsabilidad Fiscal, imponiendo un mayor ajuste al gasto de las provincias;
9. normalizar la relación con los países acreedores a través de un acuerdo con el Club de París (C 1/7).

Por impopulares, las exigencias del Fondo se convierten en “*inaplicables*” a meses de una instancia electoral de alcance nacional. No hay nada que nos oriente a pensar que vaya a cerrarse un acuerdo (tampoco *mínimo*) con el organismo multilateral de crédito antes de las elecciones de octubre. ¿Y luego?

Mientras tanto, las fracciones del capital con intereses en la Argentina intervinieron y se enfrentaron muy activamente en torno a la cuestión de los precios y los salarios.

Precios: Las penas y las vaquitas

El movimiento de los precios de las mercancías determina (mas no exclusivamente) cómo se reparte y entre quiénes la riqueza producida por los trabajadores. Ante todo, el aumento de los precios de los bienes de consumo perjudica a los trabajadores asalariados: al tener un ingreso fijo la inflación reduce su capacidad de compra (salario real). Pero además, un contexto de *inflación* latente o manifiesta opera al *interior de la burguesía* como divisor entre aquellas fracciones que son formadoras de precios y las que no, entre las que pueden trasladar los aumentos a los consumidores (sean estos capital o trabajo) y las que no pueden hacerlo, y entre aquellos acreedores cuyos títulos se ajustan según la variación de los precios internos y el resto de los tenedores de deuda (en el caso argentino actual este índice se denomina CER y afecta a una parte de los bonos emitidos por el Estado nacional luego del default).

En este devenir interviene el gobierno, expresando una determinada relación de fuerzas sociales en pugna y beneficiando a unos o a otros. Veremos a continuación cómo se desarrolló en el escenario nacional esta particular batalla.

La batalla por los precios.

Los meses de junio y julio marcaron una inflación del 0,9% y del 1% respectivamente (C 19/7). Así, el índice de precios en el primer semestre del año acumuló un aumento del 6,1% (C 16/7), alcanzando la pauta inflacionaria de todo el año 2004.

Ante semejante cuadro, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el propio Néstor Kirchner se movilizaron en busca de mecanismos capaces de contener la tendencia alcista. Primero intentaron reponer los “viejos” acuerdos de estabilización de precios concretados meses atrás con los productores ganaderos, avícolas y lácteos. Pero el proyecto no prosperó. Economía, entonces, echó mano a tres herramientas de control: la aplicación de multas millonarias, la suspensión de exportaciones de algunos productos y la imposición de aumentos a las retenciones.

El día 18, Lavagna anunció la suspensión de las exportaciones de los desechos de cobre y aluminio por tres meses; y la aplicación de multas por 70,3 millones de pesos a cuatro empresas proveedoras de oxígeno medicinal por haber acordado, estas últimas, mantener los precios más altos de lo que el “libre” juego de oferta y demanda supondría. Días después el gobierno subió la apuesta disponiendo “la mayor sanción de la historia doméstica por violación de la competencia leal” (LN 27/7). Se trató de la aplicación de una multa del orden de los 309,2 millones de pesos a cuatro cementeras por acordar las cuotas del mercado y coordinar el intercambio de “información competitivamente sensible”, es decir, por operar como la gran mayoría de los capitales en el mundo. La decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia castigó al comportamiento *oligopólico* de las empresas Loma Negra (del grupo Fortabat, vendida recientemente al grupo brasileño Camargo Correa), Minetti (de la suiza Holderbank), Cementos Avellaneda (de las españolas Uniland y Molins) y la local Petroquímica Comodoro Rivadavia. Fue la histórica y poderosa Loma Negra, controladora de más del 48% del mercado local de cemento, quien se ganó la mayor sanción: 167,2 millones.

Pero, la medida que mayor agitación causó a los dueños del capital fue, sin duda, el **aumento de las retenciones** a los productos lácteos. Dicho impuesto a las exportaciones se ajustó del 5% al 15% en el caso de la leche y del 5% al 10% para los quesos. A la decisión oficial siguió una descarga de intervenciones fuertemente opositoras lanzadas desde las entidades más poderosas del capital local. Como veremos en el apartado siguiente (véase “Las partes de la vaca...”), sólo una fracción muy pequeña del capital (expresada por la empresa La Serenísima) vindicó públicamente el aumento de las retenciones. Pero observemos, antes, el posicionamiento coligado de la mayor parte —grandes y chicos— de la burguesía local.

En un comunicado de prensa conjunto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamaron críticamente al gobierno: “Debemos dejar una visión de la Argentina de corto plazo” (LN 23/7). Al mismo tiempo, el vicepresidente de la SRA y productor tambero, Hugo Luis Biolcati, manifestó en la apertura de la 119ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional organizada por dicha enti-

dad, que la decisión del gobierno “*Es una cosa de mentalidad trastornada; hace poco estábamos festejando el envío de las vaquillonas a Venezuela y la recuperación del sector lechero y ahora resulta que es un pecado exportar, eso no es política*” (LN 22/7). Los propietarios más chicos nucleados en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) publicaron que “*la decisión de aumentar las retenciones tendrá consecuencias irreparables*”; los aún más pequeños chacareros organizados en la Federación Agraria Argentina (FAA) opinaron a través de su titular Guillermo Giannasi que “*Estamos en contra y pensamos que es un disparate hablar de subirle las retenciones a un sector que apenas está recuperándose; es agredirlo salvajemente*” (LN 22/7).

Cerrando el mes, en el acto de inauguración oficial de la muestra agropecuaria —al que sólo asistió de la primera línea del gobierno, el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli— el titular de la SRA, Luciano Miguens se despachó contra el gobierno asumiendo la representación del campo: “*La confrontación permanente como ejercicio cotidiano no es el camino [...]. No nos hace bien la indiferencia permanente; este no existirá al que parecen habernos confinado como estrategia política*”. Miguens remató con una ya clásica “paradoja” agraria: “*Somos el sector que más aporta, pero también el más discriminado*”. La voz de la Sociedad Rural no escatimó palabras a la hora de execrar la política de retenciones del gobierno: “*Decíamos el año pasado que se puede ordeñar la vaca, pero hay que darle de comer; hoy, con mayores retenciones, no sólo le sacan la comida, parece que se quieren llevar también la vaca*” (LN 31/7).

Por fuera del arco de las entidades del campo, Juan Carlos Sacco, vicepresidente cuarto de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostuvo en declaraciones radiales que “*el clima económico no le gusta ‘para nada’ porque está ‘enrarecido’ y en él ‘no pueden generarse nuevas fuentes de negocios y trabajo’*” (LN 28/7). La entidad industrial se opuso francamente a las medidas de contención ejecutadas por el gobierno. En un almuerzo con Lavagna, Héctor Méndez, titular de la UIA, manifestó: “*Así como nosotros decimos que el Gobierno no debería intervenir en la cuestión de los salarios, creemos que tampoco tiene que intervenir en los precios*”.¹⁰ Para finalmente rematar con la consigna general: “*nosotros, como empresarios, estamos a favor del libre comercio*” (LN 26/7).

Mientras tanto, las entidades que nuclean a los supermercados se comprometieron verbal y mínimamente, frente al equipo de Economía, a ampliar el listado de productos en “oferta”. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) recibían a cambio, del propio ministro Lavagna, la promesa de que no habría aplicaciones de *precios máximos* a los bienes de consumo. No obstante este ínfimo *pacto tácito* entre gobierno y supermercadistas, Alfredo Coto —presidente de la ASU y titular de la cadena de supermercados que lleva su nombre— realizó una defensa pública de la rama que representa y cargó la responsabilidad de la tendencia inflacionaria en la ejecución

¹⁰ Veremos más adelante que la UIA se manifestará a favor de la intervención del gobierno (en rigor, del Ministerio de Economía) como contenedor del nivel de los salarios, en clara contradicción con los dichos aquí citados de Héctor Méndez.

oficial de aumentos salariales generales (aunque en rigor estos sólo afectasen a un sector de los trabajadores, los privados y registrados o en “blanco”) sin medir aumentos en la productividad por sector: “No somos formadores de precios, sino el último eslabón de la cadena. Lo que se vive es una sensación térmica inflacionaria que se produce porque hay una insuficiencia de la oferta para hacer frente al crecimiento de la demanda” (LN 29/7).

Ante esta avalancha de críticas, el gobierno sólo respondió (o atinó a responder) de inmediato a los supermercadistas. La subsecretaria de Defensa de la Competencia, Patricia Vaca Narvaja, refutó a Coto afirmando que los grandes supermercados sí son formadores de precios dado “el nivel de volumen de compra y manejo de la cantidad de productos, que en muchísimas ocasiones significa imponer los precios a sus propios proveedores”; y acusó que, por sobre todas las cosas, “vienen de un régimen de rentabilidad alta, que no están dispuestos a resignar, por lo que trasladan a los precios cualquier tipo de aumento en los costos” (LN 30/7).

La fuerte tensión entre las entidades más poderosas del capital local y el gobierno manifestó sólo un momento de la batalla por los precios actual. Resta describir la pelea al interior del capital, entre distintas ramas y sus organizaciones gremiales.

Las partes de la vaca, sus dueños. (Una manifestación de la lucha interburguesa local).

Hemos visto que los más grandes propietarios organizados en la SRA y los más chicos de la CRA, Carpap e incluso de la FAA, intervinieron unívocamente en contra de la aplicación de los aumentos a las retenciones a los productos lácteos. Junto a estos se alinearon el presidente de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe, Roberto Socin, quien sostuvo: “Estamos mal porque estuvimos trabajando arduamente para que no se implementara esto y la producción había hecho su propuesta” (LN 23/7); y la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), cuyo presidente, Néstor Roulet dijo: “En Córdoba, por ejemplo, por esta disminución del valor los productores dejarían de recibir unos 152 millones de pesos” (LN 23/7).

Pero la intervención contraria —a la aplicación de retenciones— más significativa (según los términos de la disputa inter-clase) estuvo en boca del ya citado Hugo Biolcati, vice de la SRA y uno de los principales tamberos del país: “La solución es ineficiente porque no abaratará la leche al público y desalentará al productor [...]. Equivocadamente el Gobierno les hizo el juego a dos o tres empresas del mercado interno que, ante la competencia por la materia prima del productor, buscaron una protección” (LN 24/7).

El ataque explícito de la SRA a esas dos o tres empresas del mercado interno a las que el Gobierno les hizo el juego, condujo a una verdadera exposición pública (en los medios masivos de comunicación) de los contrincantes. Así, en una solicitada impresa en los principales diarios de alcance nacional, la empresa de Pascual Mastellone, *La Serenísima*, justificó la medida oficial tan execrada por todo el conjunto de la burguesía local. Bajo el título “*La Serenísima: 75 años de responsabilidad en el abastecimiento del mercado argentino*”, que a las claras reivindica la venta de sus productos en el mercado interno, se pudo leer: “Durante los últimos meses, la mejora de los precios internacionales de la le-

che viene provocando un fuerte incremento en las exportaciones, cuya consecuencia es el aumento de la demanda por la materia prima y la reducción del abastecimiento del mercado interno”. Por esto “el Gobierno tomó una medida extraordinaria, que entendemos busca un equilibrio entre el desarrollo del sector y las posibilidades del consumidor. Esta medida permitiría mantener el precio que se le paga al productor por su leche y el abastecimiento regular del mercado, evitando en los próximos meses, nuevos aumentos en el precio de nuestros productos lácteos” (C y LN 27/7).

Simultáneamente a la publicación citada, en la provincia de Córdoba productores tamberos pasaban de la palabra a la acción concreta: concentrados ante la puerta de una planta de La Serenísima propusieron suspender el suministro de leche a las industrias que “convaliden las decisiones gubernamentales” (retenciones) (LN 27/7).

Fuerte en el mercado interno, La Serenísima (entre otras empresas que sin firmar adhieren a su solicitada) promovió la implementación de retenciones a los productos lácteos para contener el alza de las materias primas que procesa. ¿Por qué? Puesto que dicha suba, generada por el aumento de la demanda externa, no pudo ser descargada sobre los “famélicos” consumidores argentinos. Así, el aumento de las retenciones protege a los Mastellone, en el mercado nacional, de la competencia de aquellas empresas lácteas que sí pueden trasladar el aumento de los costos en materia prima (pagados a los productores) a sus compradores externos. La ecuación, ahora, indisponde fatalmente a los **productores de la materia prima (el campo)** contra la contención “artificial” que el gobierno ejerce sobre la tendencia ascendente de sus productos; y a los **industriales que exportan los productos lácteos**. Por el contrario realiza los intereses inmediatos de las **industrias lácteas** que dependen para su reproducción del atribulado **mercado interno**.

La sopa del salario y la inflación

Indudablemente la *cuestión de los precios* incluye la pelea por el precio de la fuerza de trabajo: el salario. Desde diciembre de 2001 hasta junio de 2005 la inflación fue del 64,5%, mientras que en un periodo similar los ajustes hacia arriba en el salario marcaron un 44,2%. Todo esto, además, mientras incrementa la productividad industrial en general (C 18/7). Así, en este contexto “largo” de pérdida del salario real, en junio asistimos a una expansión de la protesta social: “junio mostró cifras de paros por conflictos laborales superiores a las registradas en ese mismo mes desde 1980” (LN 19/7). Cabe resaltar que algunos de los más sonados conflictos desbordaron (y se opusieron) a la dirección sindical formal. Con todo esto, la nueva conducción de la CGT, encabezada por Hugo Moyano, prometió “luchar para recuperar el poder adquisitivo de los salarios” (C 15/7). El nuevo titular de la central sindical atacó, tal y como lo venía haciendo meses atrás, al ministro Lavagna, siempre en relación con la situación estrictamente salarial y su no injerencia en la evidente inflación: “No se pueden tener en cuenta seriamente las declaraciones de Economía sobre la inflación y los salarios, porque en un momento que no hubo aumento salarial se produjeron picos importantísimos de inflación (C 14/7); “Creo que el ministro ha cumplido una función sumamente importante, ha posibilitado mejorar las condiciones económicas del país, pero ahora viene otra etapa y no sé si

está en condiciones de llevarla adelante” (LN 17/7). A partir de una lógica de sentido común, Moyano reclamó: “El salario mínimo debería por lo menos superar la línea de pobreza”. En dirección similar apuntó el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor De Gennaro, confrontando a Lavagna: “Si quisiera controlar los precios, lo que debería hacer es controlar a las 200 empresas formadoras de precios” (LN 17/7).

En las antípodas de los sindicalistas, el Ministerio que conduce Roberto Lavagna (sincero opositor de los aumentos salariales por decreto y crítico del “populismo” redistribucionista) anunció que Economía pasaría a vigilar toda suba salarial. Fue el vocero de la cartera económica, Armando Torres, quien admitió: “Se van a monitorear los acuerdos salariales con el propósito de evitar que se reproduzcan casos como los de los encargados de edificios, que incidieron en el costo de vida” (LN 13/7). Al margen de la tensión que se generó con el Ministerio de Trabajo, donde juzgaron la maniobra como una injerencia en la esfera de acción propia, no se expresó al interior del gobierno una línea disidente a la tesis lavagnista que asocia directamente *aumento salarial con inflación*. Por el contrario, se hizo público el informe del tercer trimestre elaborado por el Banco Central (BCRA) donde se advirtió que “el mayor riesgo radica en que una aceleración del proceso de recomposición salarial pueda generar una sobreestimulación de la demanda por encima de las posibilidades de producción de la economía” (LN 21/7).

Como no podía ser de otra manera todas las voces de la burguesía local adhirieron, ahora sí, a la intervención gubernamental (precisamente del equipo económico) en cuanto al congelamiento de los salarios. Por ejemplo, el asesor de la UIA, Daniel Funes de Rioja, estimó como “bueno que participe Economía, porque cualquier negociación salarial tiene que pasar por la productividad” (LN 14/7).

Por otro lado, el ya citado Miguens, titular de la Sociedad Rural, solicitó la profundización del que fuera, por lo menos, uno de los ejes de la política laboral de los noventa (y muy bien sintetizado en la ley de “flexibilización” laboral) la rebaja en los aportes que el capital hace en materia de seguridad social, jubilación, ART, obra

social, etc., puesto que “son exagerados en función de lo que queda en el bolsillo del trabajador” (LN 19/7).

Con clara didáctica, el vicepresidente de la Asociación de Supermercadistas Unidos, Federico Braun, expuso: “En diciembre de 2001 el sector tenía un básico de convenio de \$345 más 8,33 por ciento por presentismo. Luego de los aumentos convenidos de julio (9%) y agosto (9%), sumado a la incorporación de los \$100 pesos no remunerativos, el básico se fue a 870 pesos, mientras que en el comercio informal se pagan 450 pesos en negro” (LN 29/7). Sencillo: por lo que antes se pagaba 370 pesos ahora se paga 870 pesos (no es importante considerar aquí la variable *devaluación*, puesto que los supermercados colocan sus productos en el mercado interno), lo que equivale, según Braun, a un aumento salarial mayor al 100% (superior al índice de inflación citado más arriba en todo el período pos devaluación).

No hubo, entonces, una fracción de la burguesía local que se alinee con una posición favorable al aumento en el salario. Si algo permitió la devaluación en términos de competitividad capitalista a escala mundial o al menos regional, fue reducir el costo laboral (con el derrumbe salarial en términos internacionales). Pagar salarios con moneda internacionalmente devaluada fue la condición para que una fracción importante del capital pueda subsistir en un mercado mundial cada vez más competitivo. Por eso, los dueños del capital en conjunto rechazan cualquier medida “populista” que se proponga saldar mínimamente la insalvable brecha cada vez mayor entre “los que más tienen” y los que “menos o nada tienen”. Sólo las centrales sindicales (CGT y CTA) intervinieron en defensa del “bolsillo” de los trabajadores.

Pero con todo, cabe citar la nota de honestidad del ahora secretario adjunto de la CGT, José Luis Lingeri, quien reconoció “Es cierto que el sindicato presiona a las empresas para lograr aumentos, pero no es menos cierto que cada uno de ellos sabe hasta dónde se puede tensar la cuerda, de acuerdo a la productividad” (C 16/7). La confesión de Lingeri deja más tranquilos a los empresarios pero permite suponer que los conflictos laborales (y los de cualquier índole) continuarán profundizando la separación entre las bases y una dirección sindical atenta a no contradecir las pautas de producción de los empresarios locales.

Coyuntura política

La interna del PJ: por dentro, por fuera, y el intento de contener a Kirchner

Ya con la decisión tomada de presentarse por fuera del PJ en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo comenzó su enfrentamiento de cara a las elecciones de octubre intentando despegar, lo más posible, al Frente para la Victoria de la estructura duhaldista. De esta manera, tras la oficialización de la candidatura a senadora por la Provincia de Buenos Aires de Cristina Fernández, esposa del Presidente, se conoció su compañero de fórmula: el actual Ministro de Defensa, José Pampuro, quien hasta hace poco integraba el riñón del duhaldismo. A su vez, se anunciaba también que el actual intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, encabezaría la lista de candidatos a diputados, secundado por Jorge Taiana, actual vicescanciller.

Más allá de los nombres, el propio Kirchner se encargó, una y otra vez en diversos reportajes y discursos, de marcar la línea de separación con el duhaldismo, quien desde el PJ bonaerense impulsa la candidatura de la esposa del ex presidente Duhalde, Hilda González.

El primer gesto de distanciamiento fue la embestida para hacer renunciar a su cargo de titular del bloque de Diputados del PJ a José María Díaz Bancalari, quien secundará a “Chiche” Duhalde en la lista de candidatos a Senadores por el PJ. Refiriéndose a este sector, Kirchner señalaba en un acto el día 5: “Me ponen todo tipo de trabas, de adentro, de afuera”, buscan “condicionar la gobernabilidad y que la Argentina no avance”, y “son aquellos mismos que no quieren que haya gobernabilidad en la Argentina” (LN 6/7). Y el mismo día, en un reportaje: “Que quede clarito, no hay vuelta atrás. Yo hice todo lo posible, pero no encontré la misma respuesta del otro lado”. “Acá se quisieron imponer viejas prácticas con las que no estoy de acuerdo y nunca lo estaré. Justamente por eso me

quieren poner trabas a la gobernabilidad. Me hacen zancadillas. Yo no estoy con esas prácticas, y esto para mí es inadmisible". "¿Cómo puede ser que quienes dicen que me apoyan presenten ahora una lista de candidatos propios?" "No se puede ser oficialismo y oposición al mismo tiempo". (LN 7/7).

Y el día 7, en el acto de lanzamiento oficial de Cristina Fernández, la propia senadora señalaba: "Cuando a alguien se le interponen escollos algunos dicen que es el típico libreto peronista. Yo digo que eso es guión y dirección de Francis Ford Coppola y no es un manual peronista sino el guión de la película *El Padrino*" (LN 8/7). En dicho acto, y como demostración de fuerza, se hicieron presentes todos los gobernadores del peronismo menos el salteño Juan Carlos Romero, 60 intendentes bonaerenses, dirigentes sindicales como José Lingieri y Julio Piumato, y los dirigentes "piqueteros" Luis D'Elía (FTV) y Emilio Pérsico (MTD Evita), entre otros.

El propio intendente de La Matanza se refería allí a la separación del duhaldismo en los siguientes términos: "Al árbol del peronismo hay que podarlo cada tanto" (LN 8/7).

La respuesta llegó en el acto de lanzamiento duhaldista, el día 9. Allí, en su discurso, la candidata Hilda González señalaba: "El presidente me ordenó que no fuera candidata, que pactara, que negociara, y acá estoy, representando a la provincia de Buenos Aires". "Compañeros, hemos cometido un pecado imperdonable, nos presentamos a elecciones por el Partido Justicialista de Buenos Aires" (LN 10/7), aclarando los tantos en cuanto a quien manda en la estructura oficial del PJ bonaerense. Y también se refería a los ex duhaldistas que ahora participan del armado electoral presidencial: "Cómo agraviarlos. Cómo hacerlo, si dos de ellos fueron secretarios de mi marido. Como agraviarlos, si una semana antes visitaron mi casa. Ya recapacitarán, el peronismo es grande" (LN 10/7).

Sin embargo, luego de una primera parte del mes dedicada a confrontar exclusivamente con el duhaldismo, el eje de los ataques presidenciales incluyó, en la segunda mitad de julio, a la UCR y el ARI, quienes presentaron una impugnación ante la justicia a las listas peronistas, por considerar que se estaban presentando dos listas del mismo partido con distinto nombre, lo que sería anti-constitucional, aún con la contradicción hacia sus propias filas que la misma situación genera en la Capital Federal, donde afiliados a la UCR, como Enrique Olivera, se presentan en las listas de ARI.

La respuesta presidencial a estos sectores apelaba a un recurso que ya se hizo permanente en la gestión de Kirchner, el apoyarse en el consenso que su figura tienen en gran parte de la opinión pública, apelando a la ironía: "¿Tan poco confían en la gente? ¿Esa es la oposición que hay en nuestro país, que nos quieren procribir buscando alguna situación judicial? ¿Tan poca fe se tienen? ¿Nos dicen que somos tan malos gobernantes? Si somos tan malos gobernantes tienen que ir tranquilos al día 23 de octubre sabiendo que el pueblo no nos irá a acompañar" (LN 13/7).

Mientras tanto, desde la propia UCR, se tomó posición respecto de la pelea entre kirchneristas y duhaldistas. Así lo hizo el ex presidente Raúl Alfonsín, quien señaló que el discurso antes mencionado de Cristina Fernández fue producto de la "improvisación", y "defendió a Duhalde al señalar que el país le debe "el reconocimiento de haber salvado las instituciones" tras las el colapso de la economía en 2001. Al mismo tiempo, dijo que Kirchner "gobierna sin el Congreso" y lo acusó de

"firmar más decretos de necesidad y urgencia" que Carlos Menem". (LN 15/7).

A su vez, el fuego cruzado con el duhaldismo continuó durante todo el mes, siendo lo más destacado las acusaciones del diputado duhaldista Eduardo Camaño en defensa de la estructura partidaria: "Kirchner quiere destruir al justicialismo. Con el Frente para la Victoria, su nuevo instrumento electoral, intenta construir lo que otros presidentes no pudieron, que es articular un tercer movimiento histórico. Al final se dieron cuenta de que era imposible y volvieron a sus raíces partidarias" (LN 24/7).

Más allá de la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que esta división se repite, con diversas formas, en un total de 10 provincias: Misiones, San Luis, San Juan, La Rioja, Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca. En seis de las once provincias, la polarización será entre facciones del PJ. A su vez, en nueve, la puja entre peronistas será entre agrupaciones kirchneristas y corrientes justicialistas locales. En las dos restantes, San Juan y Jujuy, la competencia será entre listas que se reconocen como kirchneristas, con una más cercana al PJ y la otra a la "transversalidad". A esta situación se sumaría Córdoba, donde la lista oficial del PJ es el resultado del acuerdo entre presidencia y el gobernador, Juan Manuel De la Sota, la cual competirá con una lista transversal de fuera del PJ pero abiertamente kirchnerista, como lo es la encabezada por el actual intendente de Córdoba Capital, Luis Juez. De esta manera, de las ocho provincias que renuevan sus senadores, el PJ va dividido en siete, siendo Santa Cruz la excepción a la regla. (LN 24/7).

Y si ese es el panorama, el cruce de palabras no es la única herramienta para la construcción de fuerzas utilizada por las distintas facciones. Señalábamos que a comienzos de mes, el kirchnerismo planteaba el desplazamiento de Díaz Bancalari como conductor del bloque de diputados del PJ, un bastión estratégico del duhaldismo en el Congreso. En un mes, el objetivo presidencial se hizo realidad. A comienzos de agosto, fue elegida una nueva conducción del bloque, "integrada por Jorge Arguello (Capital), Osvaldo Nemirovski (Río Negro), Carlos Caserio (Córdoba) y Juan Urtubey (salta), la mayoría de ellos fieles al kirchnerismo salvo Urtubey que responde al gobernador Juan Carlos Romero" (LN 4/8).

Pero aún falta correr mucha agua bajo el puente. Las elecciones de octubre parecen aún un punto lejano, si se tiene en cuenta la ferocidad de la disputa facciosa. Y más aún, en un contexto en que el armado de listas, como venimos señalando, resultó de un reacomodamiento de dirigentes con más de una llamativa "reconversión". Ya decíamos más arriba que quien secunda a Cristina Fernández, Pampuro, proviene del riñón duhaldista. Y ese hecho es sólo una muestra de algo mucho más masivo de lo que parece. Inclusive, llevó durante julio a una disputa al interior del kirchnerismo por quienes disputan espacio desde la transversalidad, y no ven con buenos ojos estas alianzas presidenciales, como el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda y diputado bonaerense, Luis D'Elía, quien señaló que dentro del Frente para la Victoria hay "un 30 o 40 por ciento de intendentes mafiosos" como Raúl Othacebé, jefe comunal de Merlo, y su par de José C. Paz, Mario Ishii'. La respuesta fue inmediata: "D'Elía es un vio-

lento, un insolente y un mentiroso”, respondió Othacebé. Ishii fue más duro: “Todo el mundo sabe de quién viene el ataque. D’Elía recibe 75.000 planes sociales. Les saca dinero a esos beneficiarios para movilizarlos” (LN 4/8).

Sin embargo, los movimientos de separación intentan ser contenidos desde diversos ángulos.

Por el lado del menemismo, a través de su tradicional socio electoral Luis Patti, se produjo un acercamiento con el duhaldismo, una unidad que podría darse a partir del espanto que les produce la posibilidad de que Kirchner se radicalice apoyándose cada vez más en los sectores piqueteros y transversales, por fuera de la estructura del PJ. El propio Patti señaló: *“Para Menem no sería mala idea que apoyáramos a Hilda Duhalde, porque él entiende que preservar los partidos es preservar la Constitución” (LN 17/7)*, en clara coincidencia con las declaraciones mencionadas más arriba de Eduardo Camaño, delfín duhaldista. Y también opinó al respecto la nueva estrella del Movimiento Federal de Centro, que agrupa a menemistas y seguidores de Patti. Se trata de Moria Casán, candidata a diputada por dicho Movimiento, quien puesta a elegir entre Hilda Duhalde y Cristina Kirchner señaló que prefería a la primera, porque *“es una mujer de barrio, con buenas intenciones. Su marido gobernó el país y lo hizo muy bien. Colocaron a estos señores en el poder y ahora los traicionan. Eso no se puede hacer, hay códigos y la gente se los va a recordar” (LN 20/7).*

Mientras tanto, el acercamiento entre duhaldistas y menemistas también se realizó por medio de otro puente: el sindical. Tras la elección de Hugo Moyano como único Secretario General de la CGT, y la consiguiente ruptura de la misma con la ida de los “gordos” de la conducción, este sector propuso, para diferenciarse del apoyo de Moyano al gobierno de Kirchner, impulsar la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, actual ministro de Economía, *“si es que este decide iniciar en el futuro ese camino, frente a los “hostigamientos” que sufre del gobierno nacional por ser aliado de Eduardo Duhalde” (LN 18/7)*. Recordemos que los “gordos” fueron el brazo sindical del menemismo, con el cual siguen manteniendo muy estrechas relaciones.

Pero también por el lado de Moyano, desde la conducción de la CGT, se intenta poner un límite a los movimientos “separatistas” de Kirchner respecto de la estructura del PJ, llamando a la unidad del justicialismo (LN 15/7).

La prensa escrita, de campaña

Otro de los espacios donde la campaña electoral se cuele, pero con otra forma, es la disputa entre gran parte de la prensa escrita nacional con el presidente Kirchner.

Durante el mes de junio, el Secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, había presentado una demanda judicial contra los periodistas y editores de la revista Noticias, responsables de un artículo en que se lo cuestionaba por la distribución de la pauta de publicidad oficial. A comienzos de julio, y luego del aluvión de críticas y acusaciones de que el funcionario estaba intentando cercenar la libertad de prensa, Albistur decidió levantar la demanda. Sin embargo, las repercusiones continuaron, y desataron un mes de críticas diarias desde la prensa hacia el andar presidencial, así como la respuesta de Kirchner permanente en actos y reportajes.

El día 2, la entidad que reúne a las empresas editoras, ADEPA, difundió un comunicado en que señalaba su preocupación por la actitud oficial, acusando a ésta de ser contraria a la libertad de prensa, y señalando con preocupación el hecho de que se distribuya la publicidad oficial de acuerdo al grado de afinidad con el gobierno (C 3/7).

El hecho no quedó, allí, aunque se transformó, como dijimos, en un fuerte cruce entre matutinos y presidencia. A partir de entonces, dos fueron los ejes en donde Clarín y La Nación centraron sus críticas, a través de noticias, artículos de opinión, editoriales y hasta las respectivas secciones de humor. Por un lado, acusando a Kirchner de realizar anuncios de obras con fines electorales y de realizar los actos de dichos anuncios como excusa para impulsar la candidatura de su esposa, Cristina Fernández, cuando la ley prohíbe realizar campaña hasta 60 días antes de las elecciones, por el otro, de utilizar formas clientelares para hacer masivos esos actos.

La respuesta de Kirchner comenzó el día 5: *“Se tienen que calmar algunos amigos que hacen periodismo en la Argentina, porque realmente es una esquizofrenia”. “No me pidan que no haya más inversiones hasta octubre porque dicen que esas son inversiones electorales”. “¿No vamos a hacer más nada hasta octubre”? Entonces cerramos la Casa Rosada” (C 6/7).*

Ese mismo día Clarín publicaba una nota editorial en la que se criticaba nuevamente la actitud del gobierno frente a la nota de Noticias, aun después de que la demanda ya había sido levantada, como vimos, hacía varios días.

Al día siguiente, Kirchner prosiguió con su crítica: *“Si uno les dice algo que no les gusta, le dicen que está nervioso, que no está tranquilo. Si se les dice que no está de acuerdo, le dicen que viola la libertad de prensa. Pareciera ser que los únicos que pueden estar en desacuerdo son algunos de ellos; los otros no podemos pensar distinto” (C 7/7).*

El cruce prosiguió durante todo el mes. Inclusive con sutilezas como las que siguen, en esta oportunidad del diario Clarín. En plena discusión sobre la libertad de prensa en nuestro país, el día 15 de julio, Clarín titula en su columna editorial “Métodos policiales autoritarios”, sentando a continuación su posición respecto de la utilización en las comisarías argentinas del “álbum de fotos de sospechosos”, lo cual obviamente afecta los derechos individuales. Hasta aquí, nada extraño. Como dijimos, la nota habla sobre los “derechos de las personas”. El concepto es de por sí claro en sí mismo, sin que haga falta ejemplificarlo. O podría ejemplificarse con el mismo hecho que se está contando (la utilización del “álbum de fotos de sospechosos”), o inclusive con otros ejemplos que sucedan en las mismas comisarías, para no irse del tema en cuestión. Sin embargo, Clarín decide comenzar su editorial de la siguiente forma: *“Nuestra organización constitucional tiene un pilar básico: la defensa de los derechos de las personas. Por esta razón, las garantías individuales tienen como correlato un conjunto de restricciones para que el Estado se vea impedido de perturbar el uso, por ejemplo, de la libertad de expresión”*. El editorial continúa y ya no se vuelve a hacer mención al tema, pasando a describir la situación de las comisarías.

Otro ejemplo. El día 19 de julio, el mismo matutino publica un editorial opinando sobre un hecho ocurrido en los EE.UU. en el que la justicia de ese país condena a

una periodista del diario New York Times por no revelar su fuente de información. El editorial utiliza el ejemplo para arengar sobre la importancia de la libertad de prensa. El hecho no parecería extraño, sino fuese por el contexto de discusión con el gobierno, y porque las columnas editoriales suelen estar dedicadas a temas de mayor relevancia que la noticia mencionada. En síntesis, la mención a la noticia era una excusa para posicionarse en la discusión con Kirchner, al igual que el primer caso.

Las críticas continuaron, y las respuestas también. El 1 de agosto, Kirchner señalaba en una rueda de prensa: “*A los señores periodistas, antes de hablar de la moral de los demás que se fijen bien qué es lo que dicen. Se habla con una liviandad y una falta de propiedad que da pena. Por eso también se llegó a los niveles que se llegó en 2001*”. “*En algunos casos más que periodistas son empleados de los medios que no pueden escribir ni lo que piensan. Porque si escriben lo que piensan el dueño de los medios los echa. En algún diario que profesa una ideología bastante contraria a la nuestra eso pasa permanentemente en la Argentina. Esa es la libertad de prensa que dicen. A mí me lo han reconocido ellos mismos, muchos de esos chicos que se ven sometidos a estas cosas*”. (LN 2/8).

Y al día siguiente, respondía de esta forma a las denuncias del diario La Nación, respecto de prácticas clientelares en los actos del Frente para la Victoria: “*Es una falta de respecto a la voluntad popular. Señor director del diario La Nación: el pueblo viene por conciencia porque acompaña al Gobierno para cambiar la Patria y al país.*” “*Cuando algunos que escriben en esos medios dicen esas cosas, ¿qué hacen? ¿Periodismo o política? Política, están defendiendo los intereses de siempre, los intereses de minorías*” (LN 3/8).

En la respuesta de La Nación, volvemos a encontrarlos con algo que hemos analizado en detalle en nuestro *Análisis... N° 55*. Allí veíamos cómo este mismo diario se refería a la libertad de prensa (derecho de las empresas a publicar lo que quieran), apelando al derecho a la información (derecho de todos los ciudadanos a recibir información confiable). Como veremos, el diario apela en su columna editorial al derecho de la sociedad a informarse, para defender su libertad como empresa de decir lo que quiera. Veamos el truco: “*Numerosas veces, desde estas columnas, nos hemos referido con preocupación a los peligros que entraña para una democracia avanzar sobre el derecho a la libertad de prensa. Porque esta libertad de que goza la prensa (hasta para el mismo diario está claro que es “la prensa”, es decir, la empresa, la que goza de dicho derecho y no el conjunto de la sociedad) no es un privilegio de los medios, sino una necesidad de toda la sociedad (de manera tal que es nuestra real necesidad, la que garantiza su derecho) [...]. Los medios debemos seguir ejerciendo nuestra libertad para la crítica con el respeto que la sociedad argentina exige cada vez más de los que, de distintas maneras, la están representando*” (LN 4/8). Con lo cual, no sólo su derecho está garantizado por nuestra necesidad, sino que, de repente, la prensa se convirtió en nuestra representante. ¿Deberíamos entender, por lo planteado en el editorial de la Nación, que para este prestigio matutino, tribuna de doctrina tal como reza su encabezado, es lo mismo comprar un diario que votar un representante? ¿O tal vez que exista alguna ley secreta,

por la cual con la compra de un diario le estoy cediendo a sus dueños mi representación, la cual además está garantizada en mi necesidad de que existan? Extraña interpretación la del matutino fundado por Bartolomé Mitre.

Continuando con la descripción, el día 5 de agosto, Kirchner volvió a centrar en un acto sus ataques en La Nación: “*Ustedes ven que hay sectores que me apuntan fuertemente y fundamentalmente tienen su eje en el diario La Nación. Y no es casualidad, el señor Escribano, vicedirector de ese diario, dijo que quien hoy le toca gobernar el país iba a durar solamente seis meses, y no soporta por estar abrazado a cuanta dictadura de turno hubo, que en la Argentina se vuelvan a respetar los derechos humanos y termine la impunidad [...]. Se esconden haciéndose los independientes, sabemos que nunca fueron independientes y hoy son un diario de la oposición. Ayer defendieron a De la Rúa, y hoy defienden a López Murphy, y en 1976 pidieron la llegada de la dictadura militar [...]. Yo no ataco a la prensa, disiento con ese tipo de prensa, no tengo las mismas ideas que ese tipo de prensa. Entonces levanto mi voz democrática en esa Argentina donde todos debemos y podemos opinar*” (LN 6/8).

Y la respuesta al ataque personalizado llegó desde la corporación: ADEPA vuelve a emitir un comunicado en el que expresa “*su preocupación por los ataques a la prensa por parte del presidente Kirchner y reclama el irrestricto ejercicio de la libertad de expresión*” (LN 7/8).

Elecciones sin votantes, y alianzas sorprendentes en las internas de la oposición

Mientras todo esto sucede alrededor del PJ, el resto de las fuerzas electorales continúan su marcha hacia octubre, no sin mayores dificultades. Como venimos analizando, la descomposición y falta de credibilidad de la población en el sistema de representación no se detiene. Y en ese marco, aparecen algunas alianzas sorprendentes (o no tanto), y duras acusaciones en tradicionales aliados.

En la UCR se realizaron internas para la elección de autoridades partidarias y también de candidatos para los comicios de octubre, triunfando en ambas el sector alfonsinista, contrario a la actual conducción nacional de Ángel Rozas y a la provincial de Margarita Stolbizer. En los primeros comicios, apenas votaron el 10% de los afiliados, mientras que los segundos se dieron en el marco de internas abiertas generales de todos los partidos, donde apenas se alcanzó un 3% de los padrones habilitados, en una clara demostración de desinterés popular.

En cuanto al Partido Socialista, en dichas internas abiertas se impuso el legislador porteño Norberto Laporta sobre el diputado nacional Héctor Polino quien anunció que impugnará los comicios por haberse detectado maniobras de compra de votos (LN 8/8).

Por su parte, la fuerza conducida por Elisa Carrió, ARI, anunció un acuerdo electoral con los Partidos Comunista y Socialista de Neuquén, con posibilidades de repetir este acuerdo en Río Negro (LN 15/7).

Al mismo tiempo, el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS) sellaron un acuerdo electoral en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. (LN 16/7).

Conflicto social

Sólo por este mes, en el siguiente apartado mencionaremos tres *variables* a partir del relevamiento de las fuentes Clarín y La Nación, en lo que a protesta social respecta.

1) Demandas: aumento salarial y mejores condiciones laborales; aumento en el monto y/o cantidad de los planes sociales; libertad de presos políticos y sociales; trabajo genuino; rechazo a las subas de precios y tarifas; castigo a represores; asistencia social.

2) Herramientas de lucha / Acciones: paro parcial; cortes de ruta, calle, autopista; ocupación de edificio público; movilización; concentraciones frente a edificios públicos y comisarías; bloqueo de vías (FF.CC.).

3) Forma de organización:

Organización sindical: ATE (trabajadores de la salud, trabajadores de la Legislatura); Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad; Asociación de Profesionales (médicos); UPCN (Legislatura); Asociación del Personal Legislativo; Asociación del Personal Superior; Frente Gremial (FEB y Suteba –docentes–); SADOP (docentes privados); Adiuc (Asociación de Docentes e Investigadores de la Univ. de Córdoba); UDA (Unión Docentes Argentinos–Entre Ríos); Agmer (Asociación Gremial de Magisterios–Entre Ríos); AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica–Entre Ríos); Asociación de Trabajadores del Chaco (ATECH); Unión de Trabajadores (Utre-CTERA Chaco); Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chaco (SITECH); UPCP–Chaco (trabajadores públicos); APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas); APTA (Asociación de Personal Técnico Aeronáutico); Uecara (Unión de Empleados de la Construcción y Afines)

Mov. de Trabajadores Desocupados: Polo Obrero; Corriente Clasista Combativa; MTD-Aníbal Verón; Frente Popular Darío Santillán; CUBA-MTR; FTC; MIJD; UTD; CTD-Aníbal Verón.